



REPÚBLICA ARGENTINA

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

**REUNIÓN PLENARIA DE LAS COMISIONES DE MINERÍA, ENERGÍA Y
COMBUSTIBLES Y DE PRESUPUESTO Y HACIENDA**

Salón Azul – H. Senado de la Nación

18 de marzo de 2014

Presidencia de los señores senadores Guillermo Juan Pereyra y Aníbal Fernández

PUBLICACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TAQUÍGRAFOS

– En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Salón Azul del H. Senado de la Nación¹, a las 14 y 19 del martes 18 de marzo de 2014:

Presidente (Pereyra). – Buenas tardes. Vamos a dar continuación a la reunión que dejamos pendiente el jueves de la semana pasada, porque pasamos a un cuarto intermedio.

Hoy a continuar con las distintas exposiciones que proponen los bloques de la oposición. El bloque de la Unión Cívica Radical propone como primer expositor al ingeniero Alieto Guadagni, exsecretario de Energía; después, viene el licenciado Nicolás Gadano. Proyecto Sur-UNEN, a través del senador Solanas, propone a Gabriel Rolando Cherqui, de la comunidad Mapuche Kaxipayin, de la provincia del Neuquén. El Frente Progresista-Ccari, a través de la senadora Odarda, propone al señor Martín Velázquez Maliqueo, representante de la comunidad Winkul Newen, de la provincia del Neuquén, y al señor Ignacio Pratti, referente de la Coordinadora del Departamento Mapuche, de la provincia del Neuquén. También estará presente el señor Enrique Fonti, por extrabajadores ypefianos. Por último, he propuesto al compañero Ceferino Leiva, actual trabajador petrolero de Yacimientos Ypefianos, a quien le ha tocado vivir algunas situaciones también y que expondrá esta tarde

Mañana contaremos con la presencia del ingeniero Callejas, propuesto por el senador Giustiniani, y comenzaremos a las doce a los efectos de emitir dictamen a posteriori.

Quiero decirles que cada expositor tiene diez minutos para exponer; podrá extenderse algunos minutos más, pero nada más que eso, por favor, porque es larga la lista que tenemos para el día de hoy. Además, tenemos que tener en cuenta el debate que esto pueda generar. Así que les pedimos que cumplan con el tiempo de exposición. Muchísimas gracias.

A continuación, invitamos al ingeniero Alieto Guadagni.

Sr. Guadagni. – Esta historia empieza en el año 99, cuando Repsol hizo una OPA –una oferta pública de adquisición– por 15.000 millones de dólares –una oferta hostil– y se quedó con todo YPF. Hoy estamos recomprando el 51 por ciento de YPF por 5.000 millones de dólares; esto quiere decir que la estamos recomprando barato. Bueno, no es tan fácil llegar a esa conclusión porque la YPF de esa época era muy distinta a la YPF de hoy. La YPF de hoy es muy chiquitita comparada con la YPF de la anterioridad. Más que decir que tenía prácticamente cuatro veces más reservas de gas que hoy y la producción de petróleo era 50 por ciento más, etcétera, etcétera. O sea, en cuanto a este precio, si bien es más barato 5.000 por 51 por ciento que 15.000 por el ciento por ciento no quiere decir que sea más económico, más viable, porque son estamos hablando de dos empresas distintas. Y ¿por qué son dos distintas? Porque YPF tuvo un saltazo muy grande, exactamente el 21 de febrero de 2008, cuando Repsol le vende la cuarta parte de la Compañía a un consorcio australiano –porque el Grupo Petersen nunca fue una empresa argentina accionista de YPF– sin poner un solo peso, y ahí decide una política de acuerdo entre los dos por el cual vacían a YPF distribuyendo el 142 por ciento de las utilidades en el período 2008, 2009, 2010 y 2011, y ahí es el colapso productivo de YPF y se achica toda la empresa.

Alguien puede decir: bueno, lo que usted está diciendo es un acuerdo de partes. No, no fue un acuerdo de partes; fue un acuerdo estimulado, propiciado y bendecido por el gobierno nacional. Porque hay una cláusula resolutoria en el contrato –les pido a los señores senadores que lean el contrato–, la cláusula 5.1, que dice que este contrato es válido únicamente si se aprueba por escrito antes de 12 meses por la comisión nacional de defensa

¹ Se deja constancia de que los faltantes en la Versión Taquigráfica obedecen a problemas de audio durante la reunión.

del comercio y por la Secretaría de Comercio Interior. Y como si esto fuera poco, el director de acciones categoría "A" de YPF votó siempre a favor del vaciamiento, siguiendo las instrucciones del ministro, que es hoy el mismo ministro que estaba en esa época. Esto para entender que claramente no alcanza con comparar 15.000 millones por todo, con 5.000 por el 51 por ciento. Esto exige una tasación más precisa.

Si uno va a los libros de YPF, al balance, todo el paquete estaría valiendo 7400 millones de dólares. Claro que todos sabemos que las contabilidades, en tanto no se adecuan con la inflación, subestiman la realidad. Quiere decir que, por el valor de libros, 51 por ciento es 3800 millones de dólares. Pero de allí no se puede deducir que 5000 sea mucho, porque 5000 puede reflejar mejor la realidad.

Pero el problema principal de este contrato son los pasivos ocultos, los cuales no han sido tratados por el Tribunal de Tasaciones. El Tribunal de Tasaciones, en el último informe –lo acabo de ver hace un minuto–, de pasivos ocultos no dice prácticamente nada. ¿Qué son los pasivos ocultos? Hay tres grandes pasivos ocultos: los pasivos ambientales, el contrato con los brasileros por la central térmica de ciclo combinado de Uruguayana y Maxus. De los pasivos ambientales, yo les sugiero a los señores senadores que lean el informe del auditor, donde se les va a explicar los pasivos contingentes ambientales: la refinería de La Plata; los vecinos de Quilmes; los vecinos de La Plata; los 13.000 pozos cerrados de YPF, muchos de ellos con problemas ambientales en cada jurisdicción, y una cantidad más de información que ustedes pueden tener sobre los pasivos ambientales en las diversas zonas del país. Los auditores son bien claros en expresar que las provisiones hechas contablemente puede que no reflejen lo que va a terminar pagándose. Ése es el primer tema.

El segundo tema es el juicio con AES, la empresa brasilera. Los brasileros hicieron un contrato con YPF, allá, a finales de los noventa, e hicieron una central de ciclo combinado de 500 megas en Uruguayana. Se hizo un gasoducto. Y esa central no funcionó nunca. Los brasileros pusieron 500 o 600 millones de dólares. Hicieron una demanda internacional ante la Cámara Arbitral de París, que es el órgano competente por los acuerdos, y ésta dijo que YPF es responsable por este daño. La demanda son 1038 millones de dólares, a valores del año 2009, los cuales seguramente deben ser acrecentados por los intereses intercalares al año hasta la realidad. Y a todo esto –no los aburro leyéndolo, está en el balance–, el propio balance de YPF dice que la cámara ya está pidiendo la valuación del daño.

Y después tenemos el tercer juego de daños, que es enorme, que son los contratos de Estados Unidos. Por una serie de contingencias jurídicas, YPF, que se desprendió de todos los activos en Estados Unidos, se quedó con los pasivos. Yo les pido a los señores senadores que lean las páginas 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55 y 56, donde nos va a contar infinidad de juicios: en Texas, en New Jersey, en Houston, en Milwaukee y en una cantidad de lugares.

Yo no estoy en condiciones de analizar esto en detalle; supongo que eso lo debe hacer el Tribunal de Tasaciones. Ahora, cuando yo veo lo que dice el Tribunal de Tasaciones en su último informe sobre contingencia, lo único que dice es: en la presente valuación se consideraron los montos provisionales contablemente por la empresa en lo referente a juicio y contingencias.

Sr. Presidente (Pereyra). – Perdón, ingeniero. El senador Pichetto le solicita una interrupción. ¿Se la concede?

Sr. Guadagni. – Sí.

Sr. Pichetto. – Le voy a pedir que se acerque un poco más al micrófono, por favor.

Sr. Guadagni. – Un pedido suyo es una orden para mí, senador.

Sr. Pichetto. – Usted habla de los pasivos en Milwaukee, Estados Unidos. ¿Se está refiriendo a la empresa Maxus?

Sr. Guadagni. – Sí.

Sr. Pichetto. – Esa empresa Maxus fue comprada –si mal no recuerdo– por el ingeniero Estenssoro, en el proceso del gobierno del doctor Menem, antes de la privatización. Digamos que Estenssoro hizo el ordenamiento, redujo personal –esto forma parte de la historia– y compró Maxus como una operación de expansión de YPF. También hizo una operación en el Ecuador, que operaba con Maxus.

Digo porque esto forma parte del proceso previo a la entrada de Repsol. Esto es lo que quiero dejar en claro.

Sr. Guadagni. – Lo que pasa, senador, es que, desde el punto de vista jurídico, el responsable es siempre YPF, cualquiera sea el accionista.

Sr. Pichetto. – Lo mismo que los pasivos ambientales. Y corresponsable, el Estado nacional. Hay muchos de los denominados pasivos ambientales que hoy están discutiéndose en la Corte Suprema de Justicia, como es el caso de ASUPA. La demanda ASUPA es contra el Estado nacional.

El Estado siempre va a responder. Acá, en la Argentina, además, le entran todas al Estado. ¿Usted sabe que el arco del Estado mide 24 metros; no 7 metros, como el de una cancha de fútbol? Le patean de 100 metros y es gol. Así que siempre van a demandar. El demandado acá es el Estado nacional. Y no va a haber nunca nadie que se quede sin reparación económica, ingeniero.

Sr. Guadagni. – Le leo, por favor, la página 47: reclamos ambientales contra YPF en La Plata y Quilmes; otros reclamos y pasivos ambientales. Los auditores y el balance de YPF nunca dicen que YPF no es responsable. Ellos no dicen lo que usted está diciendo. Ellos dicen que la empresa es responsable.

Sr. Pichetto. – Ingeniero: no quiero hacer un debate personal. Lo que digo es que es indudable que YPF tiene pasivos ambientales, que son producto de la etapa previa a la privatización y también de la no inversión o inacción de Repsol. Pero también hay acciones judiciales de pasivos ambientales por acción de la empresa petrolera, cuya demanda está dirigida claramente al Estado nacional para que pague.

Sr. Guadagni. – Seguro. Pero el balance que yo tengo acá, que salió el 7 de marzo –le sugiero que lo lea, senador–, habla claramente de las demandas contra YPF. Porque son los auditores de YPF los que firman este balance. Después queda el gran juicio –les repito– con los brasileros, donde ya hay fallos de primera instancia.

¿Qué es que lo estoy diciendo? Estoy diciendo algo muy simple: en cualquier acuerdo comercial, los pasivos ocultos son responsabilidad del vendedor, no del comprador. Si yo compro una casa y aparece una deuda impaga o aparece otra cosa, es el vendedor el responsable, y en todas las escrituras se pone.

Entonces, la sugerencia sería que en este caso quede bien claro que los pasivos ocultos y las contingencias que resulten por encima de la previsión contable, que es muy baja... Porque la previsión contable no llega a 600 millones de dólares. YPF previsiona como un costo y saca de su balance 5020 millones de pesos, que son 600 millones de dólares. Y con esto pretende cubrir el juicio de los brasileros, que es más de 1000 millones; la infinidad de juicios en Estados Unidos, que están detallados acá, y los pasivos ambientales. Claramente, esta cifra va a dar por arriba de los 600 millones de dólares. Entonces, la pregunta es quién va a poner el excedente. ¿Quién lo va a poner? Ese es el tema que quería mencionar.

Para cerrar, los intereses resultan el triple de lo que hubieran resultado en la situación de normalidad. Un país con una deuda externa exigible en dólares que no llega al 10 por ciento del PBI, no puede estar pagando intereses que son el triple de los que paga Bolivia, o

de los que paga Uruguay, o de los que paga Chile, o de los que paga Perú. Acá hay que decir los temas como son. Este es el costo de haber distorsionado las estadísticas oficiales. Esta es la única razón por la cual el riesgo país argentino es alto, porque es un país que no tiene endeudamiento exigible en moneda extranjera. Ese es un costo.

Esto es todo lo que quería decir, presidente.

Sr. Presidente (Pereyra). – Gracias, ingeniero.

No sé si la Unión Cívica Radical quiere hacer alguna pregunta...

– *No se realizan manifestaciones.*

Sr. Presidente (Pereyra). – Tiene la palabra el señor Gadano.

Sr. Gadano. – Buenas tardes a todos.

Muchísimas gracias por la invitación que me permite participar de esta discusión. De hecho, para mí es muy importante que el Congreso esté discutiendo cuestiones vinculadas a la política de hidrocarburos, porque esta problemática nos preocupa mucho a todos en el corto plazo. Nos encontramos ante una situación de desequilibrio energético que tiene impacto sobre las cuentas externas y fiscales. Y esto, con una mirada de mediano y largo plazo, nos genera una expectativa muy grande por los recursos no convencionales que tenemos y por aquellos que tenemos que hacer un enorme esfuerzo para explotar adecuadamente.

Quiero aclarar que durante mi exposición voy a hablar, en primer lugar, del acuerdo en sí y de la oportunidad que nos brinda y; en segundo término, del tema del valor; tercero, de la forma de pago y, finalmente, quiero hacer un comentario sobre el futuro de YPF y de la industria.

En relación al acuerdo, me parece muy positivo que este tema, que se abrió con la expropiación, se cierre con un acuerdo de partes con el expropiado, en este caso Repsol. Hubiera sido muy complicado para la Argentina que este tema quedara abierto y se extendiera en el tiempo o que se hubiera tomado una decisión unilateral por parte de nuestro país. Porque hubiera generado cuestionamientos por parte de los tribunales internacionales y de los arbitrajes internacionales. Además, simplemente, hubiera significado patear el problema para más adelante. Por lo tanto, creo que cerrar este acuerdo es positivo para YPF, ya que YPF necesita estabilizar su situación accionaria dentro del Directorio, pero el conflicto con Repsol complicaba dicha gestión.

Además, porque YPF –y toda la gestión petrolera– y la Argentina necesitan de socios e inversores; algo complejo, siendo Repsol una empresa importante y con un conflicto abierto por tanta plata. Por lo tanto, como evidentemente allí hubo obstáculos, es bueno cerrar el tema, incluso, por lo expresado por el señor Guadagni cuando manifestó que esto, en alguna medida, contribuye a ir mejorando el deterioro que ha tenido la Argentina frente al mundo de las finanzas internacionales, es decir, el deterioro que ha tenido nuestro crédito público; algo que hoy explica las altas tasas de interés que, de hecho, tenemos que convalidar en este acuerdo. Por consiguiente, entiendo que la oportunidad de hacer un acuerdo entre partes es positivo.

Respecto del valor, no soy tasador y, como se mencionó en la sesión de esta Comisión conjunta la semana pasada, hay muchísimos métodos para valuar empresas. En efecto, creo que el Tribunal de Tasaciones tienen métodos, aunque algunos limitados, que permiten valuar desde un punto de vista contable patrimonial; tomando ratios de operaciones similares o descontando los flujos futuros a valor actual.

Es verdad lo que decía el ingeniero Guadagni en cuanto a que Repsol pagó mucho más por la empresa en 1999 que lo que vende hoy y que la empresa tiene menos reservas probadas, pero también es cierto que en aquel momento el petróleo estaba 20 dólares y hoy

está a 100 dólares, por lo tanto, hoy vale mucho más cada barril de petróleo. Asimismo, hay que decir que en las reservas probadas de YPF –como figura en el impacto de tasación– hay un impacto mucho menor todavía relativo a los recursos no convencionales, dado que todavía no hay un desarrollo e incluso tampoco hay una fecha de tasación. Por ende, no se han convertido en reservas probadas y no se encuentran como reservas.

Ahora bien, para ser sintético, lo que puedo decir en cuanto al valor es que si me preguntan hoy: “Vos a 25 dólares por acción –que es lo que se está pagando por la acciones de YPF–, ¿comprás o vendés?” Yo seguro que las compro, porque el valor de YPF hacia delante va a ser mucho más alto, no solamente porque se está perfilando allí un modelo de gestión muy profesional, sino también porque en los próximos años el marco de la política energética y de la economía argentina pueden dar lugar –estoy hablando de plazos largos– a que entre en valor y cueste mucho más de lo que hoy en el mercado.

De acuerdo con la experiencia, relativa a lo que uno ha visto que vale YPF en las cotizaciones históricas –ya que ha tenido una enorme volatilidad y ustedes lo saben–, ese valor se encuentra en el entorno de lo razonable.

Luego, en cuanto a los pasivos que mencionó el ingeniero Guadagni, creo que no son ocultos, porque están en el balance. De hecho, todo lo que citó él fue en referencia al balance de YPF. Entonces, en principio, tanto desde el punto de vista del registro contable como desde lo que los inversores valúan a la hora comprar o vender las acciones de YPF en el mercado local o en el internacional, esa información está incorporada en las valuaciones.

Por otro lado, que pueda haber en el futuro un mayor impacto ambiental, siempre puede pasar y son contingencias. Esa no es una información oculta, sino conocida. Finalmente, sobre el tema de los juicios se ha convertido en un problema...

– *El señor senador Rozas solicita una interrupción a la Presidencia.*

Sr. Presidente (Pereyra). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Rozas.

Sr. Rozas. – Deseo preguntar que si está en el balance de YPF, y hay un dictamen arbitral de París que habla de 1000 millones de dólares, y la Comisión Arbitral habla de 600 millones para todas las contingencias posibles que resulten, ¿cómo justifica usted que esa medida sea correcta?

Sr. Gadano. – Lo que yo digo es que seguramente ese no es un fallo firme porque, de lo contrario, YPF tendría que haberlo pagado y, además, se encontraría expresado de otra manera. En este sentido, quiero manifestar que yo he participado defendiendo a la Argentina de empresas petroleras en juicios ante el CIADI –empresas petroleras que cuestionan el redireccionamiento del gas que decidió el Estado argentino–, pero no contra YPF. Aquí me decía el ingeniero Guadagni que van contra YPF porque el contrato era con YPF. Ahora bien, la decisión no fue contra YPF sino contra el Estado Argentino que, en su momento, privilegió el abastecimiento local frente a las carencias de gas. Lo que quiero decir es que seguramente no se debe tratar de un fallo firme y ejecutable –así que esperemos que el valor sea menor–, pero está reflejado en el balance y los auditores hacen una mención de ello.

– *El señor senador Rozas realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.*

Sr. Rozas. – Su apreciación es muy subjetiva porque, por más que sea menor, por lo menos la obligación ineludible de la Comisión Arbitral debería fijar el monto que fijó la Comisión Arbitral de París. Después, si apelan y resulta menor, mejor para YPF, mejor para el país y mejor para el acuerdo. Pero usted no puede decir que ese monto finalmente puede ser menor porque seguramente esto es transitorio.

Sr. Gadano. – No, no, sinceramente no lo sé.

Sr. Rozas. – Por eso, que diga que no conoce el tema, me parece mejor a que desmienta una

cuestión de un dictamen de la Comisión Arbitral de París.

Sr. Gadano. – No lo desmiento; lo que digo es que tampoco me animo, por desconocimiento, a cuestionar el balance de YPF. No sé si está...

Sr. Rozas. – Si ponen 600 millones pero, inicialmente, la Comisión Arbitral de París, por un solo tema, fija 1038 millones...

Sr. Gadano. – Puede ser que esté mal...

Sr. Rozas. – Cualquier persona se da cuenta que es insuficiente la reserva que ha hecho la Comisión Arbitral. Creo que eso es...

Sr. Gadano. – La reserva que ha hecho YPF en su balance, ¿dice usted?

Sr. Rozas. – Sí, sí...

Sr. Gadano. – No lo sé.

– *El señor senador Fernández solicita una interrupción a la Presidencia.*

Sr. Presidente (Pereyra). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Fernández.

Sr. Presidente (Fernández). – Me parece que estamos cometiendo un error de interpretación más contable que de otra cosa. Ya sabemos lo que hay que pagar y, si hay que pactarlo, es porque se va a pagar. Y no hay provisiones al respecto, hay previsiones. Lo que significa que, en el marco de esa política de previsión, pensando en que se puede tener un costado flaco ante ese juicio, se debe apartar una parte de las utilidades a fin de, eventualmente, afrontarlo. En este caso, está todo provisionado, no hay provisión, *ergo*, no hay nada exigible.

Luego, en cuanto a lo provisionado, una cosa es lo que pueda decir la Comisión Arbitral de París y, otra, lo que puedan decir los evaluadores. Porque los evaluadores van a tomar determinadas medidas, ya que han sido consultadas montones de formas de evaluaciones –vuelvo a insistir: el presidente de YPF y el ministro de Economía lo dijeron–, también por estudios privados, incluso, para demostrar cómo se llegó a esos pasivos. Por consiguiente, esos pasivos están chequeados, no por el Tribunal de Tasación que, en definitiva, es administrativo y no puede evaluar esas cosas, sino por las distintas formas que garantizan que uno no se está quedando corto a la hora de tomar esa decisión. Porque, de lo contrario, estaríamos haciendo un pésimo negocio en beneficio de Repsol, y flaca es la vocación que tenemos nosotros de llegar a ese punto.

Sr. Rozas. – Perdóneme, senador, pero no coincido. Creo que lo mínimo que debería hacer la comisión de tasación es tomar como medida preventiva lo que ha dicho el Tribunal Arbitral como base. Después, se peleará en el futuro y ojalá que resulte muchísimo menos, pero inicialmente no puede tomar menos que ese valor, que ha sido fijado por ahora, aunque esté en grado de apelación. Por lo menos, ésta es nuestra mirada.

Sr. Presidente (Pereyra). – Adelante, licenciado.

Sr. Gadano. – En términos generales, tengo que –incluso por este intercambio– señalar nuevamente que no soy contador, sino que soy economista y no hice una tasación ni conozco en detalle ese juicio. Sin embargo, sí puedo decir que en términos generales éste me parece que es un valor, por esa porción de las acciones, que está en el entorno de lo razonable. Esa es mi apreciación.

Con relación a la forma de pago, veo naturalmente más problemas. El otro día en esta comisión parecía flotar una idea de que siempre es mejor pagar a plazo y no es así. Obviamente, depende de la tasa de interés con la que estemos endeudándonos. Incluso, el ministro Kicillof habló de cien años para dar un ejemplo. Yo nunca me endeudaría cien años si me van a cobrar el cincuenta por ciento anual de interés. Es decir, en nuestra economía familiar, cuando vamos a comprar un electrodoméstico y nos ofrecen cuotas, si son sin

interés, seguramente lo compramos, aunque habría que mirar lo que nos cobran los bancos de seguros y otras comisiones. Pero si tenemos que pagar la tasa de interés que los bancos nos cobran por financiar, ahí ya lo pensamos y en muchos casos pagamos al contado. Lo que pasa es que acá la posibilidad de pagar al contado no existe porque la Argentina, lamentablemente, se encuentra en esta coyuntura de cerrar este acuerdo con una posición fiscal muy deteriorada. Es decir, no tiene el superávit fiscal como para afrontar este pago ni de manera total o parcial, con una posición de reservas internacionales muy complicadas y problemas en el mercado cambiario que todos conocemos. Entonces, tampoco tiene, como tuvo hace algún tiempo, reservas excedentes en el Banco Central para afrontar este pago y también tiene una situación de acceso al crédito voluntario muy complicada, muy mala.

Por eso, no es que la Argentina decide pagar en plazo. Me parece que es la única opción que tiene hoy para afrontar un pago tan grande en moneda extranjera y, por eso, tiene que convalidar tasas de interés muy elevadas, ya que son tasas que en lo nominal, en los cupones de intereses son altas, 8; 8,75. Este mecanismo de ajuste, de acuerdo al valor de mercado que tengan los bonos, que implica que quizás vamos a tener que poner hasta mil millones de dólares adicionales, lo que significa es que vamos a estar reconociendo el retorno que se le pide a la deuda argentina en el mercado, que es casi de dos dígitos en dólares. Es una deuda muy cara, es un precio muy alto. Ahí quisiera hacer una disquisición que es más presupuestaria, pero aquí hay gente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda también. La Argentina tiene dos leyes de responsabilidad fiscal que indican que no deberían pagarse gastos con bonos, en lo que la jerga se conoce como "debajo de la línea" cuando esos gastos no han sido devengados presupuestariamente antes; es decir, cuando no fueron reflejados en el presupuesto de gastos.

Sr. Presidente (Pereyra). – Perdón, licenciado, pero su tiempo se ha ido agotando teniendo en cuenta las interrupciones.

Sr. Gadano. – Simplemente, quería mencionarlo ese tema porque sería bueno, incluso, para que no haya problemas en el futuro con el pago de esta deuda, hacer la excepción que habitualmente se hace al cumplimiento de los artículos de estas leyes, si es que estos bonos, este pago, se hace de esta manera.

Para terminar deseo realizar un comentario, y con esto cierro, en relación con el futuro de YPF y de la industria. Creo que tiene que discutirse una nueva ley de hidrocarburos; es importantísimo, eso es muy significativo para el desarrollo futuro de los recursos no convencionales. También, habría que pensar el rol de YPF porque hoy vamos a tener una YPF mixta con participación pública y privada. En el marco de la participación pública, el Congreso votó que eso se distribuye –como se hablaba la vez pasada– proporcionalmente entre las provincias productoras.

En lo personal, considero que en ese contexto, hacia delante, YPF debería ser el único vehículo de participación pública del Estado argentino federal en la industria de los hidrocarburos y sería bueno revisar los roles de empresas como ENARSA o de algunas empresas provinciales, dado que sería realmente un problema que haya un escenario en el cual las empresas públicas argentinas compitan entre sí en el mundo petrolero. Entonces, si reconstruimos y recuperamos una YPF con control público federal, quizás, sería oportuno que sea el único instrumento de participación en la industria petrolera en todo el país. Con esto he terminado.

Les agradezco mucho por la oportunidad de esta intervención.

Sr. Presidente (Pereyra). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Para no dejar de reflexionar con el licenciado sobre algunas cuestiones que planteó respecto del tema del interés.

En primer lugar, quiero compartir que no había posibilidad de pagar al contado. Me parece que éste es un dato fundamental. Todos sabemos lo que significa preservar las divisas del Banco Central y que el propio banco está haciendo un esfuerzo importante para limitar – creo que lo ha logrado– con algunas medidas eficaces y también con la devaluación el tema del dólar, que creo que se va ordenando.

Concretamente, la pregunta es si usted considera conveniente y necesario este acuerdo o este fundamento solamente de los intereses está basado en una visión negativa sobre el acuerdo. En segundo lugar, si la empresa, además, tiene capacidad económica, tiene indudablemente un proceso de inversiones desde el mundo, inversiones económicas que pueden venir... porque si no existe este acuerdo es difícil que estas inversiones se den. Ahora bien, si la empresa retoma un sendero de crecimiento con capacidad de pago, me parece que es un tema que indudablemente en el acuerdo se puede absorber y concretar dentro de los costos de un acuerdo complejo. No sé si me entendió la pregunta.

Sr. Gadano. – La respuesta es que yo creo que sí, que es conveniente el acuerdo en estas circunstancias. O sea, enfrentados a este dilema, aun con el costo que significa para la Argentina hoy endeudarse, y que es el resultado de decisiones que se tomaron antes, creo que desde el punto de vista de la situación de YPF y de la industria petrolera, que es crítico, es oportuno hacer un acuerdo, pero hay que reconocer que se están pagando intereses altos.

Creo que el futuro de YPF es importante y puede crecer mucho. Por eso, decía que el valor también está en el entorno de lo razonable. Por eso mencioné esto al final porque depende también de que YPF no tenga que competir. Por ejemplo, el *offshore*, que es el único dominio federal, lo tiene todo ENARSA. Para hablar de explorar o explotar en el *offshore* hay que hablar con ENARSA. ENARSA hace varios años que está trabajando y no ha producido resultados ahí. En ese momento, YPF no estaba con control público, pero hoy, que YPF vuelve a tener control público, por qué no pensar que el dominio del *offshore* no debería ser transferido a YPF, que seguro lo va a explotar y a manejar mejor, o ser licitado de manera competitiva para que cualquiera que quiera venir a invertir en el *offshore* argentino pueda hacerlo. Es decir, me parece que la decisión de consolidar el control público sobre YPF obliga también a revisar la situación de otras iniciativas que se tomaron en otro momento a escala nacional y provincial, y que en el futuro, de mantenerse, podrían entrar en colisión con el interés de YPF.

Sr. Presidente (Pereyra). – Invitamos al señor Gabriel Rolando Cherqui de la comunidad mapuche.

Sr. Cherqui. – Buenas tardes. Es un gusto poder saludarlos.

Mi nombre es Gabriel Cherqui. Soy werkén de una de las comunidades de Loma de La Lata.

Vengo justamente desde el corazón de lo que ustedes llaman “Vaca Muerta” y de lo que ha significado toda esta polémica en el país con relación a lo que significa la extracción hidrocarburífera dentro del territorio, en este caso de las comunidades mapuches.

Primero y principal, quiero manifestar que, si bien en la Constitución Nacional no están reflejados los derechos de los pueblos originarios, yo escucho hablar de todas estas políticas de millones de dólares, que obviamente hacen a la economía del país, pero también nos gustaría escuchar desde aquellos lugares, dado que la misma Constitución habla del respeto a los pueblos originarios, y viendo que todo lo que están haciendo va en contra de nuestro principio como pueblo, como persona, como vida, que se acuerden de nosotros, que allí existimos nosotros y que, mientras se discuten muchas cosas, mucha gente se está muriendo.

Tengo la suerte de estar al lado de una persona que conoce mucho, que es don

Pereyra, y que viene de allá también. Todo lo que nosotros podamos decir está reflejado en papeles, no es que se nos ocurrió. Entonces, venimos diciendo desde hace catorce años que Repsol contaminaba. Siempre el gobierno provincial y nacional defendió a Repsol. Siempre lo defendió.

En determinado momento, en todas las noticias escuchamos que el gobierno había tomado la decisión de expropiar a Repsol bajo el argumento de la falta de inversión y el grave pasivo ambiental que estaba dejando esta empresa. Desde hace catorce años veníamos diciéndolo con pruebas en mano, con muchos estudios y juicios contra Repsol. Yo personalmente fui a Madrid con un grupo de personas a interrumpir lo que significaban las reparticiones de ganancias. Obviamente, fuimos criticados en el país y en el mundo, pero la consecuencia la seguimos viviendo en persona, en la salud, en la vida y en las vidas que se iban cobrando desde aquel tiempo y hasta el día de hoy por la extracción hidrocarburífera a costillas de lo que sea.

Cuando la señora presidenta toma la decisión y habla del pasivo ambiental, obviamente dijimos lo que decimos desde hace muchos años. Primero, parecía ser que estábamos en contra de la extracción hidrocarburífera, cuando siempre dijimos que estábamos en contra de la explotación y no de la extracción. Estamos en contra de la explotación de niños, de mujeres, de nuestra Madre Tierra, pero obviamente el país necesita el progreso y tenemos que aprender a convivir con estas situaciones.

Ese progreso se ha llevado nuestras vidas y se está llevando la vida de cada uno de nosotros, no solamente de los mapuches. No es casualidad que dentro de la población indígena, en una población de 150 personas como tiene mi comunidad, cinco vidas se ha llevado el cáncer, la malformación genética y los abortos espontáneos. Entonces, hoy hablan de los pasivos ambientales y de la plata que va a ingresar al país, de los miles y millones de dólares de los que se hablan.

A nosotros nos gustaría manifestar esta preocupación a cada uno de los senadores, que se pongan a pensar un poco en los miles y millones de litros de agua que se contaminan por día en la explotación hidrocarburífera y, en este tiempo, con el gas convencional, donde no hay un control tampoco.

No lo decimos nosotros, sino los mismos estudios que se están haciendo, las mismas evidencias, porque vivo ahí y puedo decir claramente todo lo que está sucediendo. Porque nos gustaría tener un vaso de agua como el que tenemos acá. Y traigo una muestra de lo que nosotros tomamos (*Exhibe una botella con agua.*) para dejársela a cualquiera que haga un análisis sobre esto.

Entonces, queremos saber qué es lo que se hará con este convenio y si está incluida la remediación de nuestro espacio territorial. Queremos saber si dentro de lo que se pagará ya se descontó el daño ambiental al que hizo referencia la presidenta y que, justamente, el 19 de noviembre de 2009 detectara el Poder Judicial de la Nación, donde se mencionaba el grave pasivo ambiental que ya existía dentro de los lagos, ríos y el territorio de Neuquén. Esta no es una idea nuestra; hay cosas concretas, con estudios y resultados.

También como regalo expropiaron a Repsol y traen a Chevron, que es una de las empresas cuya reputación conocemos. Siguen trayendo indígenas dentro del territorio y dejándonos las consecuencias, porque obviamente que el gas y el combustible llegan a Buenos Aires, pero la contaminación queda todos los días. Ya no podemos tener animales ni arrollar ninguna parte de nuestra actividad. Entonces, es necesario que cada uno de los presentes, que somos responsables, tengamos en claro que es necesario que se sanee el espacio territorial de las comunidades y que se tenga en cuenta, tal cual lo dice la Constitución, la consulta antes del ingreso a nuestro espacio, al menos de parte de nuestra

forma de vida para no corromper una cultura, una filosofía de vida.

Es cierto que hay juicios en contra del Estado, como nosotros mismos lo hemos hecho, como así también contra Repsol. Y justamente, la Corte nos termina de dar la razón el 10 de diciembre, donde se declara incompetente y ordena al Juzgado Federal de la provincia de Neuquén a resolver la situación. Entonces, dentro de todo este arreglo hecho, de este convenio, nos preguntamos si está incorporada la remediación de nuestros espacios, de los espacios de los hijos de nuestros hijos, o simplemente los intereses del Estado. Porque se han puesto por encima los intereses del Estado antes que la vida de las personas. No es casualidad que hoy hablamos de Vaca Muerta y que en algunos lugares no haya un hospital o escuelas. Yo vengo de una comunidad mapuche, y como no tengo obra social, no me puedo atender si no es por alguna prepaga. No existe una posibilidad de vida. No nos están dejando una posibilidad de vida. Y aparte de eso, la economía del país se está yendo al carajo.

Entonces, quienes estamos pagando las consecuencias somos nosotros. Simplemente, quiero dejar pruebas, en palabras y testimonios de puño y letra hechos por profesionales integrantes del Poder Judicial de la Nación.

Sr. Presidente (Pereyra). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – En primer lugar, comprendemos la sensibilidad, la preocupación por lo ambiental. Destaco también que, por una cuestión de tiempo cronológico de existencia de la empresa estatal, el proceso de los pasivos ambientales es más de la YPF estatal que de la propia empresa privada. No vengo a defender a la empresa privada. La reflexión es: ¿qué hacemos frente a este tema?

Su comunidad trabaja también con la actividad petrolera. Usted mismo trabaja con esa actividad, que genera un mejor nivel de vida e ingresos importantes. Yo me pregunto por qué no hay un punto de compatibilización entre el cuidado ambiental y el esquema productivista que la Argentina necesita. No hagamos un discurso tan dramático cuando ustedes están desarrollando una actividad económica, tienen empresas que negociaron y acordaron con Repsol cuando era una empresa privada y prestaban servicios petroleros. Todo el mundo sabe. Nosotros no somos ingenuos. Entendemos el derecho de los pueblos originarios y el reclamo de la tierra. Está todo bien con eso. Está contemplado incluso en la norma constitucional. Pero me pregunto, ¿por qué no podemos compatibilizar los intereses del país, los de los pueblos originarios, el medio ambiente y el esquema productivo que el país necesita?

¿Por qué no hacemos un discurso de más realismo? Porque la actividad petrolera en esa región ha permitido el mejoramiento de las condiciones de vida de su comunidad y de mucha gente que trabaja en la comunidad petrolera. ¿Es así o no, Cherqui?

Sr. Cherqui. – Justamente, hay mucha gente que está trabajando porque no nos han dejado otra forma de vida.

Sr. Pichetto. – Es una buena forma de vida. Trabajo en blanco, ingresos importantes.

Sr. Cherqui. – No tenemos otra posibilidad.

Sr. Pichetto. – La otra era una economía pastoril donde se morían de hambre.

Sr. Cherqui. – Era la que elegimos nosotros y la que decidimos.

Sr. Presidente (Pereyra). – Tiene la palabra la señora senadora de la Rosa.

Sra. de la Rosa. – Relacionado con lo que decía recién el senador, quiero preguntar si el señor que está acá sentado y que nos está explicando sobre esta situación que está viviendo en su provincia, es dueño de la empresa La Lata SRL, subcontratista de YPF, y que esos contratos son millonarios. Tenemos una información de contratos de más de 14 millones de pesos.

Sr. Cherqui. – En primer lugar, lo que dijo el senador Pichetto es la realidad. Nosotros

trabajamos de alguna manera para sostener nuestra economía y es una de las formas de trabajar en blanco. Reitero que no nos han dejado otra forma de vida. De hecho, estamos exigiendo a YPF que nos devuelvan el espacio suficiente para desarrollar nuestra actividad filosófica y cultural. El problema acá no es La Lata, sino la economía del país. Y nosotros sí estamos de acuerdo con lo que dice el senador que hay que defender el patrimonio del país, pero no a costillas nuestras, que somos los que estamos planteando por qué no podemos trabajar. Pedimos que el Estado cumpla su función y que sostenga este país sin afectarnos a nosotros. No le estamos diciendo que no...

Sr. Presidente (Pereyra). – Perdón, hay un tiempo ya cumplido.

Tiene la palabra la señora senadora Morandini.

Sra. Morandini. – Volvemos a ver reproducirse un comportamiento en el que todo el tiempo se descalifica a quien habla y no a lo que esa persona habla. Que el señor venga a dar testimonio y que trabaje para YPF, no invalida el testimonio que nos da. Estamos habituados todo el tiempo a que se descalifique a la persona, no para negar el argumento que está sosteniendo.

Sr. Presidente (Pereyra). – Tiene la palabra la señora senadora Odarda.

Sra. Odarda. – Me parece que lo más preocupante es que haya senadores que se niegan a saber escuchar y que, por el contrario, pareciera que están haciendo tareas de inteligencia respecto a nuestros hermanos de las comunidades mapuches de Neuquén, que han venido a ofrecer su testimonio dentro de este ámbito democrático, donde hemos escuchado a todos los representantes del oficialismo y también a otras voces, como en este caso, la de los pueblos indígenas, específicamente, del pueblo nación Mapuche.

Recién decía el senador Pichetto que es cierto que están las convenciones internacionales, los derechos, la Constitución, pero lo importante es que se cumpla. Todos sabemos que están, pero que no se cumplen.

Por otra parte, el Convenio 169 de la OIT que garantiza expresamente el derecho a la consulta libre, previa e informada de ninguna manera se le ha garantizado a nuestros pueblos indígenas. Así que con toda razón apoyo el testimonio del señor Cherqui, y espero que no haya este tipo de interrupciones y ataques a quienes vienen a dar valientemente su testimonio.

Sr. Presidente (Pereyra). – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. – Quería hacer una solicitud. Como el señor está dejando material a la Comisión, quería solicitarle si podía ordenar que se nos entregara copia para poder conocerlo. Está hablando de juicios contra Repsol y dice que trae los testimonios. No le quiero preguntar si conoce las carátulas porque a lo mejor él no es abogado y no los conoce, pero como trae documentación, me interesaba verla. Entonces, le pido, presidente, si puede ordenar por la Secretaría de la Comisión que se nos entregue copia.

Sr. Presidente (Pereyra). –Cómo no, senadora.

Sr. Cherqui. – Muchas gracias por la oportunidad. Estamos acostumbrados a la discriminación desde hace muchos años, pero lo único de lo que estamos seguros es que vivimos en ese espacio desde antes que esto fuera la Argentina. Seguimos viviendo y vamos a vivir por años, y vamos a morir en ese lugar. Por lo tanto, mientras exista un litro de agua, vamos a estar presentes. Es lamentable que no nos podamos entender. Estamos para sumar, no para restar. Muchas gracias.

Sr. Presidente (Pereyra). – Tiene la palabra la señora senadora Riofrío.

Sra. Riofrío. – No pensaba intervenir, pero me parece de una susceptibilidad extrema lo manifestado por la senadora Morandini y la senadora Odarda.

Lo que ha planteado el senador Pichetto es la posibilidad de hablar de este tema con franqueza, que es lo que pareciera que molesta. Honestamente, no he advertido ni en la

exposición que hizo el senador Pichetto ni la senadora De la Rosa ninguna cuestión ofensiva. Incluir la palabra "discriminación" en esta casa y en este ámbito es extremo porque el tema es controversial, ya que tiene que ver con cuestiones culturales, objetivas y filosofía de vida. Entonces, negar que es controversial y no ofrecer un planteo sincero, como ha hecho el senador Pichetto, es innecesario.

Cuando hemos tenido nuestra oportunidad de plantear el tema, también hemos sentido posturas ofensivas. Modos y gestualidades molestas; sin embargo, lo aceptamos y todo el mundo dijo lo que tenía que decir. Me parece una sensibilidad exagerada.

Sr. Presidente (Pereyra). – Tiene la palabra el señor senador Fuentes.

Sr. Fuentes. – Poder salir de las subjetividades y del respeto que el Senado tiene a todos los expositores, me parece importante mencionar datos duros y concretos de lo que ha implicado respecto a las cuestiones centrales que se están debatiendo en torno al medioambiente. Las impresiones que la nueva administración de YPF ha realizado en estos dos años. De un promedio de crecimiento de un cien por ciento de la inversión en remediación y doscientos por ciento en tratamiento y liberación de tierras. De un promedio de 2007 al 2011, de apenas 30 millones de dólares a YPF, se ha invertido en remediación, en 2012, más de 60 millones, y, en 2013, más de 70.

En los últimos dos años, YPF incrementó la inversión en remediación de su situación socioambiental en más del cien por ciento, comparable con el promedio de los últimos cinco años. Desde 2013, se logró revertir por primera vez la curva de acumulación de tierras e hidrocarburos mediante el tratamiento y la liberación de un doscientos por ciento más de las tierras que el promedio de los cuatro últimos. Creció el ochenta por ciento en la inversión de medioambiente, seguridad y salud. Inversiones en medioambiente nos dio un promedio de apenas cuarenta millones de dólares, y hoy YPF está superando los 160 millones de dólares. Las inversiones de YPF en política y medioambiente, seguridad y salud se incrementaron en los últimos dos años en un ochenta por ciento con respecto al promedio de los últimos cinco años.

Monitoreo de aguas y ríos de Loma de La Lata. Los resultados muestran que no existen concentraciones cuantificables de hidrocarburos en las aguas monitoreadas en 2013. En las aguas superficiales, en ninguna de las muestras de agua. Tampoco fueron detectados metales pesados en ninguna de las muestras de agua. La toma de muestra está a cargo de la consultora BfU, especialista internacional en medio ambiente, y los análisis se realizan en los laboratorios Induser, uno de los principales laboratorios del país.

Por otro lado, la provincia, a través del EMPA, monitoreó sobre plantas potabilizadoras para abastecimiento las aguas de las comunidades de Loma de La Lata. Los resultados muestran que no existen concentraciones de hidrocarburo en las muestras de aguas tratadas en las plantas. Tampoco fueron detectados metales pesados en ninguna de las muestras de agua. Las tomas de muestra en los análisis se realizan en forma quincenal con laboratorio Induser, uno de los principales laboratorios del país en esta especialidad. Los protocolos de toma de la muestra han sido acordados en la comunidad cada quince días con testigos de los mismos. Quiero significar que he sido testigo, porque he trabajado muchos años atrás en toda esa zona, cuando el propio Pichetto hablaba de la desidia que el propio Estado tenía con la protección del medio ambiente. Yo el otro día daba el ejemplo de Puesto Hernández, uno de los caudales de agua más importante de Río Colorado, frente a otro yacimiento en Mendoza, río de por medio, que era el yacimiento Bayo. El secretario general puede recordar perfectamente eso.

Durante décadas YPF estatal arrojó el agua de tratamiento de purga directamente al río, con cianuro, metales pesados, envenenando el río. Acordémonos que en esa época se

contrataba y subcontrataban los mismos unos a otros. Recién cuando el agotamiento de los yacimientos de Mendoza–Bayo- justificó la necesidad de trasladar agua de inyección en el recupero necesario se hicieron las primeras obras de previsión, con lo que se llaman las piletas de IPA, International Petroleum, las de tratamientos para poder hacerlo. Es decir, esa inacción mi provincia y el pueblo de mi provincia, sin distinción de etnias, lo padeció permanentemente. Hoy estamos, fundamentalmente por la reforma del 94, con la responsabilidad de preservar el medio ambiente en manos de las provincias. Y en las provincias deben exigir a la Nación el acompañamiento de las políticas de coordinación al respecto. Hoy tenemos la garantía de una administración nacional al frente de YPF, que tiene como uno de los objetivos principales el recupero de los daños sufridos y fundamentalmente una política que apunte no solo a generar orgullo como neuquinos o como argentinos sino fundamentalmente a dar satisfacción a toda esta demanda de vieja data.

Acá informa YPF que desde 2013 los aportes a la comunidad Kaxipayiñ para mejorar la calidad de vida fueron más de 2.700 millones de pesos. En el año 2013, YPF realizó inversiones sociales y aportes por casi 3 millones de pesos para ayuda social y obras vinculadas a la mejora en la calidad de vida en las comunidades; entre ellas, pago de obra social a las familias que no la tienen, provisión de gas, energía eléctrica, agua para el consumo, obra de vivienda, sistematización de hectáreas para sembrar alfalfa, transporte escolar y apoyo para cuestiones culturales, operación en Loma de La Lata, con procedimiento de consulta a comunidades, protocolo de consulta a comunidades, protocolo de consulta firmado a espejo, con la declaración 162 de la OIT. Y reuniones semanales y permisos diarios otorgados a las comunidades.

¿Qué quiero significar con todo esto? Que entiendo el planteo de fondo que se hace en la medida en que el derecho a determinar la forma de vida que una comunidad tiene. No voy a entrar en esa discusión. Cuando en el resto de la comunidad existen recursos que con lógica necesidad y con criterio y cuidado deben utilizarlo-tomo las palabras del senador Pichetto- es necesario encontrar ese punto de equilibrio en el respeto irrestricto de los derechos de las comunidades y en la protección fundamental del medio ambiente. Simplemente lo que estoy diciendo que es una discusión. Yo comparto esos criterios porque no son solamente un problema de los pueblos originarios, pequeños emprendedores agropecuarios, que optan por una forma de vida y donde la expansión urbana de la ciudad de Neuquén los expulsa permanentemente... O sea, el poder tener la garantía que cada grupo cultural, que cada grupo familiar tenga la posibilidad de optar por una modalidad de vida y el Estado lo considere valioso, y lo acompañe. Creo que no hay ningún senador que no esté de acuerdo en ese tema. Estamos discutiendo otra situación, en la cual no estoy negando ni el daño ambiental ni las consecuencias que ha habido. Simplemente digo que ha habido un esfuerzo muy importante, a partir de un control nacional de la mayoría del capital, por no repetir errores del pasado y poder corregir los daños que ya han producido.

Sr. Presidente (Pereyra). – Gracias, senador.

Tiene la palabra la señora Liliana Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. –Gracias, presidente.

Le pido a través suyo al senador Fuentes, como ha dado importantes datos, respecto del estudio de agua, el señor acaba de traer una botellita acá diciendo que ese es el agua que ellos toman y el senador con datos proporcionados, inclusive mencionó la consultora que ha hecho los estudios, quería ver si había posibilidades que el senador Fuentes proporcionara esa información también.

Sr. Fuentes. –Yo no voy a negar que existan estancamientos y depósitos de agua que han sido contaminadas, pero en los convenios celebrados YPF nos informa que hay una

provisión. Por un lado, el EMPA: "obras de ampliación, captación y distribución de aguas potables para el consumo de las comunidades de Loma de La Lata". "Permitirá duplicar la provisión de agua potable, de 240 mil litros por día a 480 mil litros". Está la lista de acciones ejecutadas. Pero fundamentalmente, claro, hay que esperar. Pero fundamentalmente en la espera "provisión diaria para uso y consumo". "Provisión de agua potable con cambio de cisternas para uso diario en la forma adicional a los seis bidones por familia que provee la familia", YPF suministra bidones de 20 litros por semana. No niego que esa agua existe, lo que niego es que esa agua se tome.

Sr. Cherqui. –Justamente usted dice la verdad. Estamos tomando agua que se llevan en camiones y en bidones porque no podemos tomar agua. Y esa no es responsabilidad nuestra. Por eso vuelvo a decir: "Invitamos a una mesa, busquemos una solución". Busquemos una forma en donde se nos respete, y ustedes puedan trabajar tranquilos. Nosotros para nada estamos en contra diciendo que no sino diciendo "cuidennos", como me parece que es deber del Estado. Pido disculpas si estoy diciendo algo que no es correcto, pero creo que es deber del Estado nacional y provincial de respetarnos y cuidarnos, como a cualquiera de los demás. Es eso lo que estamos pidiendo.

Sr. Presidente (Pereyra). –Tiene la palabra la señora senadora Odarda.

Sra. Odarda. –Me parece que la verdad es cruda. El senador preopinante dice "20 litros por familia por semana". Me dicen "adicional". ¿Qué quiere decir? Que el agua está absolutamente combinada. Claramente.

Sr. Presidente (Pereyra). –No, no.

Sra. Odarda. –Por eso necesitan 20 litros.

En relación a esto, también quería señalar que, cuando el senador habla de la falta de responsabilidad del Gobierno nacional, sobre todo con la grave contaminación de nuestros ríos, y habló específicamente del río Colorado, que sufre y ha sufrido en este último tiempo varias consecuencias de delitos ambientales, como es derrames petroleros en las aguas del río Colorado, que hay dos entes interjurisdiccionales que dependen del gobierno nacional, como es el COIRCO y la AIC, que también tienen las facultades delegadas y que no la han cumplido. O sea que no es responsabilidad únicamente de las provincias sino de estos entes interjurisdiccionales que han mirado siempre para otro lado, mientras nuestros ríos se contaminaban.

Sr. Presidente (Pereyra). – Tiene la palabra el señor senador Fuentes.

Sr. Fuentes. –Tal vez me he explicado mal. Usted entenderá que la distribución en una zona que tiene una migración a partir de los años 50, en extensión, en localizaciones pequeñas... Los estudios que se han hecho entre el año 2013 sobre el estado de aguas en ríos y lagos muestran que no existen concentraciones cuantificables de hidrocarburos -no lo digo yo sino el informe- en las aguas superficiales. En ninguna de las muestras de agua. Tampoco fueron detectados metales pesados en ninguna de las muestras de agua.

Es evidente que habiendo localizaciones y puestos de trabajo agropecuarios distantes unos de otros, camionetas de YPF deben llevar el suministro de agua para consumo en esas circunstancias. Esa situación no satisface a nadie. Estamos acostumbrados a vivir en una ciudad en la que el personal de cuidado de edificios a las 7 de la mañana "manguerea" a presión las veredas y en la que el consumo de energía de un consorcio lo determina el habitante más friolento del edificio que obliga a poner la caldera al máximo y el resto debe regular la temperatura abriendo la ventana en pleno invierno; mientras tanto, en algunos lugares no hay gas o se utilizan garrafas en condiciones deplorables.

Evidentemente, acostumbrados a abrir la canilla, queremos ver correr el agua. Estamos hablando de situaciones existentes del ámbito rural en donde hay, en este momento,

preocupación, concurso, asistencia y ayuda. Por eso decía que la discusión que planteaba él era mucho más profunda. No era simplemente el tema de ser víctimas de algo, sino que era el derecho que tienen las comunidades de optar por una forma de vida autónoma y propia.

Esa discusión está afuera, en este momento, de lo que estamos discutiendo entre nosotros. Por eso dije que mi opinión no era subjetiva, sino que iba, en el marco de la emotividad del debate, a dar datos duros y oficiales suministrados por YPF.

Sr. Presidente (Pereyra). –Invitamos al señor Martín Velázquez Maliqueo, representante de la Comunidad Rincul Nehuen de la provincia del Neuquén.

Sr. Velázquez Maliqueo. – ¡Mari mari kom pu che! Buenas tardes a todos.

Buenas tardes, señor presidente. En este debate tan importante del que estamos siendo parte, más allá de que en la provincia del Neuquén haya comunidades beneficiadas por la actividad hidrocarburífera, no es el caso de todas. Hoy tenemos más de veinte comunidades mapuches asentadas sobre la formación Vaca Muerta con proyecciones importantes en diferentes puntos de los territorios.

Paso a compartir un posicionamiento mapuche en relación a la expropiación de Repsol: (Lee:) Señores senadores y senadoras del Estado argentino, buenas tardes. En primer lugar, como werkuen del pueblo Nación Mapuche, quiero manifestar nuestro posicionamiento ante un tema tan importante que hoy nos convoca: la expropiación de Repsol. Una firma que tanto daño nos ha causado hacia el interior de nuestro pueblo, ceñida de muerte cultural, contaminación, corrupción, pobreza, marginación, manipulación de gobiernos dóciles, una justicia encargada de brindarle seguridad jurídica, impunidad para cometer tales homicidios a nuestros Wallmapu territorio. Hoy, este gobierno pretende avanzar con la destrucción de los espacios que aún están libres de contaminación con el pretexto de explotar la formación Vaca Muerta para mantener el autoabastecimiento local. ¿Local para quienes? Si como población mapuche que vivimos en estos territorios afectados estamos empobrecidos, condenados a muerte por la grave contaminación a la que estamos expuestos en estos territorios y nuestra gente se está muriendo de múltiples enfermedades por la contaminación y no por la vejez como es la regla natural de la vida. La reciente muerte de la Lonko Cristina Lincopan de 30 años producto de una hipertensión pulmonar es un claro ejemplo de esta situación. No se pueden negociar los activos de una multinacional obviando los pasivos de una gran deuda cultural y ambiental que deja esta petrolera en nuestro territorio sin saldar. La misma Repsol, antes de ser expropiada, había reconocido sus pasivos ambientales. Es decir, los daños ambientales que dejaron en nuestro territorio. Le solicitamos a este Honorable Senado que exija la cuantificación de estos pasivos que YPF, durante la gestión de Repsol, ha dado de alta relevancia y que no han sido considerados en esta discusión. El gobierno de la provincia del Neuquén promete mantener una paz social a costa de perseguir y encarcelar a quienes denuncian estas situaciones de violación a nuestros derechos humanos. Como es nuestro caso en el que el Estado se lava las manos y deja a su justicia como responsable para perseguir e inventar causas para cubrir su impunidad. Señores senadores: acá se está violando el derecho al consentimiento libre previo informado como lo establece la ley nacional 24.071 y los tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de los cuales el Estado es signatario. Exigimos a este honorable Congreso que se pronuncie por la aplicación de este derecho. Por todo lo expuesto, exigimos una reparación completa e inmediata de nuestros territorios afectados y el desprocesamiento ya de nuestras autoridades mapuches procesadas por luchar a favor de la vida y el fin de la criminalización de la protesta. ¡Marichiweu, marichiweu!"

Este es el mensaje que nosotros traemos como pueblo Nación Mapuche dentro de la

provincia del Neuquén, que exijo que sea tomado en cuenta, porque los lugares donde se explota el petróleo, el gas se explota dentro del patio de nuestra casa, no se explota dentro del patio de la casa de los senadores, de los diputados o de la del gobernador. Nuestro territorio es el que está siendo contaminado que es donde tenemos el futuro de nuestros niños que están creciendo viendo esta situación. Por eso exigimos el respeto a nuestros derechos a una legislación que nos ampara. Creo que el Estado nacional argentino ha sido uno de los pocos países que ha logrado incorporar tanta legislación a favor de los pueblos indígenas y, por eso, exigimos que esos derechos sean aplicados con plena participación de los directos afectados que somos nosotros, el pueblo mapuche de la provincia del Neuquén. Necesitamos tener una participación activa en las políticas públicas del Estado, no queremos ir a la cola de los conflictos cuando se suscitan en los territorios. Queremos que haya una presencia activa del gobierno en estos lugares. Recientemente, venimos de paralizar un pozo exploratorio en la comunidad mapuche Wiñoy Folil que la empresa Sinopec estaba construyendo para la empresa YPF en la zona de Santo Domingo-Ramón Castro sin ningún tipo de consentimiento libre previo informado por parte de la comunidad. Cuando aún la comunidad hoy se encuentra en la zona de veranada haciendo el período de trashumancia y al llegar a su invernada se encuentran con esta situación en su comunidad.

Por eso exigimos que haya participación activa del Estado en pos de velar por los derechos que tenemos como pueblo Nación Mapuche. Esa sería mi exposición.

Sr. Presidente (Pereyra). – Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Nilo Cayuqueo de la Confederación Mapuche Neuquina y viene en reemplazo del señor Ignacio Prafil referente de la Coordinadora de Parlamentos Mapuches.

Sr. Cayuqueo. – Gracias, señor presidente. Gracias señores senadores, señoras senadoras y a todos los presentes. Soy Nilo Cayuqueo, de la comunidad mapuche llamada la Tribu de Coliqueo.

Me gustaría comenzar haciendo un pequeño comentario histórico que en la misma comunidad fui invitado con la comunidad a dar testimonio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 1999 a Washington. En esa audiencia que hubo posteriormente la comisión interamericana intimó al Estado argentino con todos los documentos y los testimonios que se dieron intimó a que pare la exploración de petróleo y de gas en esa zona que estaba afectando a las comunidades de Catri-pain y Painemil. El Estado nunca cumplió esa orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la contaminación continuó y no hubo nunca, ni siquiera, un diálogo con las comunidades de casi toda la provincia del Neuquén.

Y esto quiero mencionarlo porque trae a colación lo que decía el senador Pichetto y el senador Fuentes de que esto se soluciona hablando, con diálogo y comparando. Me gustaría comentar que acá lo que hay que hacer es cumplir con las leyes. El Estado argentino es signatario –como les decía el hermano Maliqueo– del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que el Estado firmó y se comprometió a cumplir y hoy no lo está cumpliendo en nada esos convenios. Me gustaría preguntarles a todos los senadores si han leído el Convenio 169, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas que el Gobierno argentino se comprometió a cumplir. Está violando las propias leyes que el Estado argentino firmó y se comprometió a cumplir, con la excusa de que como tienen mayoría en el Congreso y que los votó el 54 por ciento pueden hacer lo que ellos quieran y lo están haciendo de hecho, porque los pueblos originarios no tenemos voz ni voto en este Congreso. Para nada. Hay otros Estados donde los pueblos originarios por más minoría que sean son reconocidos,

tienen un cupo en el Congreso como senadores o diputados; en este Estado eso no existe. Y lo que es peor aún es que el Estado argentino utiliza organismos, instituciones del mismo Estado para dividir y manipular a las comunidades indígenas, como es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que es un ente político propio del Estado, del Gobierno, para dividir a las comunidades indígenas. A los que están a favor del Gobierno les da dinero, hacen reuniones en hoteles de cinco estrellas para que digan que todo está bien, para que digan que la explotación de petróleo y de gas los va a beneficiar y que van a tener trabajo. Es verdad, a veces la gente cuando tiene necesidad asiente y aceptan un sueldo en una YPF o lo que sea.

Pero esa no es la forma. Me parece una irresponsabilidad de parte del Estado no cumplir con las leyes. Me parece una falta de responsabilidad y de visión de futuro no ver la contaminación que está ocasionando, que eso va a afectar no solamente a los pueblos originarios que vivimos allí, sino a toda la humanidad, a todo el pueblo argentino y a toda la humanidad. Y por más dinero que ganen no les va a alcanzar, porque cuando estemos todos contaminados nos vamos a tener que mudar del planeta.

Entonces, queremos apelar a la responsabilidad del Estado que tiene en este caso. La leyes –como dijimos–, la consulta, el consentimiento de las comunidades establecidos en las leyes el Gobierno no las está cumpliendo. Y esa es la democracia que tenemos que construir acá. Esa democracia no está construida todavía, porque votar cada cuatro años y después hacer lo que ellos quieran mientras nosotros estamos sufriendo las consecuencias de esa contaminación, de esa explotación indiscriminada no es democracia. No es democracia para nosotros.

Tradicionalmente, en nuestra comunidad, la gente, el lonko participaba con toda la comunidad y decidiendo. Con las comunidades contiguas se hacía lo mismo, y nosotros no tenemos ni voz ni voto en nada. Por lo tanto, esto no es democracia para nosotros. Mi abuela, Carmen Coyipal, decía que odiaba a la bandera argentina porque iba el Ejército Argentino con la bandera a matarnos, a masacrar a las comunidades en la época de Roca.

Entonces esa reparación histórica nunca se hizo. La masacre de nuestra gente, de las comunidades, la venta de niños, la expropiación, la esclavización de las mujeres, los hombres mandados a los ingenios, eso nunca se reparó ni se habla de eso; es algo que no existe en la mente de los argentinos. Y nosotros estamos sufriendo esas consecuencias y lo estamos pagando. Eso es lo que pasa hoy día. Entonces, necesitamos más democracia, necesitamos más consulta y cumplir con las leyes.

El estado de Neuquén hoy está procesando a varios dirigentes. Hay más de cien hermanos y hermanas que están procesados. Se ha montado un operativo para decir que estos hermanos han cometido un delito, que han intentado pegarle a una funcionaria del Gobierno. Hoy día la hermana Relmuñanco, Mauricio Rain y Martín Maliqueo –el hermano que habló recién– están procesados. Les montaron un operativo para hacerlos caer presos porque están defendiendo sus derechos. El argumento es que agredieron a una funcionaria y ahora los están acusando de homicidio. Y están procesados en Zapala. Nosotros estamos viajando allí para apoyar a estos hermanos y hermanas que están injustamente procesados por la Justicia, que está totalmente comprada, al servicio de las multinacionales y del Gobierno de la provincia del Neuquén. Eso no lo podemos permitir.

Por último, me gustaría mencionar que este diálogo que hemos tenido hoy día se continúe, que seamos escuchados y que tendamos a crear un futuro para nuestros hijos. Nosotros los Mapuche siempre estamos pensando en las próximas generaciones que van a venir. No lo pensamos hoy día. Eso lo decía mi abuelo, mi bisabuelo, los loncos, los Pillankuze; todo el mundo hablaba de las próximas generaciones. Y acá a veces no lo estamos pensando porque estamos pensando en cómo ganar más plata, tener más regalías,

más porcentajes de lo que nos van a dejar las empresas multinacionales y nos dejan una secuela de contaminación, de pobreza, de empobrecimiento de nuestra gente y de su ambientación.

Entonces, para que haya una democracia –como dijimos antes–, tenemos que ser consultados para tener nuestro consentimiento para cualquier proyectos que se lleve a cabo en nuestras comunidades, y esto no se está haciendo y tenemos que empezar por ahí.

Por último, queremos agradecer a todos los senadores que han tenido esta iniciativa de escucharnos aquí en este Honorable Congreso y ojalá que en el próximo Congreso alguna vez los pueblos indígenas, los pueblos originarios, estemos representados acá como pueblos originarios que vivimos aquí por miles de años. La Argentina tiene apenas 200 años; nosotros vivimos aquí hace miles y miles de años. No hemos venido de ultramar.

Muchas gracias y ojalá que este mensaje que hemos traído hoy toque sus corazones y lo puedan compartir con su gente, con sus colegas, porque acá vemos que son muy pocos los senadores y senadoras que hay. Ojalá puedan compartir esto a ver si podemos construir una Argentina donde se respete la diversidad cultural, donde se respete al pueblo, por más pequeño que sea, a decidir su propio destino, a tener su cultura, a desarrollarla. El senador Fuentes daba números de pasivos y de indemnización, de números, pero eso no es todo. Tenemos que hablar también del daño cultural...

Sr. Presidente (Pereyra). – Se va agotando su tiempo.

Sr. Cayuqueo. – Hubo mucho daño cultural a las comunidades, donde la gente ha sido enajenada, han tenido que salir de las comunidades, han perdido su cultura, su idioma, sus tradiciones. Eso no se está midiendo para nada, así que les agradezco y espero que podamos seguir discutiendo estos temas.

Sr. Presidente (Pereyra). – Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. – Primero, antes de la pregunta, quiero hacer una aclaración. Señor: acá participan dos comisiones, estamos trabajando en comisión, no en el pleno de la sesión.

Ahora, quiero hacerle una pregunta a usted, si me permite, a través de la Presidencia. En la Nación Mapuche del Neuquén esta inversión que hoy se somete a consideración del Congreso ha ocupado el ciento por ciento de los terrenos de la Nación Mapuche del Neuquén o hay todavía en Neuquén terrenos que no están ocupados. ¿Ocupa el cien por cien?

Sr. Cayuqueo. – No, obviamente no. La comunidad Mapuche, las cuarenta o cincuenta comunidades que vivimos en Neuquén no. Obviamente no porque nos han quitado casi todos los territorios.

Sra. Negre de Alonso. – Porque usted dijo: “Están en el patio de nuestra casa”. Mire, yo soy la senadora de San Luis y nosotros también tenemos Nación Mapuche en San Luis, pero nosotros le dimos un territorio para que se desarrollaran como querían.

Sr. Cayuqueo. – Sí, lo conocemos.

Sra. Negre de Alonso. – Perfecto. Yo lo que le pregunto es lo siguiente. Usted comenzó diciendo que están en el patio de su casa, de la Nación Mapuche, pero también en el patio del gobernador, en el patio de los diputados. Así empezó su discurso.

Entonces, yo le pregunto ¿quedan territorios? ¿Hay posibilidades de trasladar la Nación Mapuche para que pueda dentro del Neuquén o directamente es el todo o nada lo que plantean? No le entendí bien su razonamiento. Entiendo lo que ustedes están diciendo porque en mi provincia viven de otra manera, porque tienen un territorio alejado.

Entonces, ¿YPF les ha ocupado el ciento por ciento de la Nación Mapuche del Neuquén?

Sr. Cayuqueo. – Es que están avanzando en esa dirección todo lo que más puedan para explotarlo y sin tener un miramiento, una consulta siquiera, un diálogo con las comunidades

que están siendo afectadas. Eso es violar las leyes...

Sra. Negre de Alonso. – No, yo le preguntaba una cuestión fáctica. Lo de la ley, lo de la OIT lo sabemos. Le preguntaba eso porque no conocemos el lugar, era para interiorizarnos. Disculpe porque quizás hice una pregunta que estaba referida a él. Después le pregunto un poco más a usted. Muchas gracias, presidente.

Sr. Presidente (Pereyra). – Tiene la palabra la senadora Odarda.

Sra. Odarda. – Simplemente, quiero aclarar que jamás se puede permitir como una solución al conflicto el traslado de las comunidades indígenas de su territorio a cualquier otro lugar; esa fue quizás la metodología que utilizó el genocida en la época del genocidio del General Roca, de expulsar a las comunidades mapuches a lugares donde no tenían agua, donde no tenían manera de vivir dignamente, a los lugares más pobres de nuestro territorio patagónico.

Por lo tanto, el hecho de trasladar de un lugar a otro ni a una comunidad ni a sus sitios sagrados, como los Chenques, como los Rehues, que también es otra metodología utilizada por las grandes empresas, no es solución. La solución es otorgarles sus derechos y dejar que opten por su forma de vida –la que ellos elijan, porque eso es parte de nuestra legislación que así lo garantiza, sobre todo la Constitución Nacional– en su propio territorio.

Sr. Cayuqueo. – ¿Le puedo responder a la senadora?

Sr. Presidente (Pereyra). – Está bien. En un minuto, por favor.

Sr. Cayuqueo. – Esto tiene que ver con la concepción que a veces existe acá, la concepción muy europea, de que trasladamos a esta gente a otro lugar, le damos mejores tierras para que vivan. Ahí están nuestros ancestros, nuestro cementerio, nuestros huesos, nuestras creencias, nuestras ceremonias. Todo está ahí. Y por eso dije que hay que leer los convenios internacionales, con los cuales el Gobierno Argentino se comprometió a cumplir, como el Convenio 169, que habla de eso, de que no se puede trasladar, sino dar, incluso, más tierras de las que poseen para tener una vida más digna. Y eso está en las leyes y el Estado argentino lo sigue violando impunemente, ¿no? Porque nosotros no tenemos ninguna opinión en ese sentido.

Sr. Presidente (Pereyra). – Gracias, Cayuqueo.

Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. – Quiero aclararle a la senadora de Río Negro lo siguiente. Lo que le preguntaba al señor es si está ocupado el ciento por ciento del territorio de la Nación Mapuche en Neuquén. Simplemente eso, si es que esta inversión ocupa el ciento por ciento o solo parcialmente. Lo pregunto porque no conocemos el lugar.

Sr. Presidente (Pereyra). – Gracias por la aclaración.

Invitamos al compañero Enrique Fonti, extrabajador de YPF para que exponga la situación de los compañeros ypefianos.

Sr. Fonti. – Buenas tardes para todos. Buenas tardes, señor presidente. Soy Enrique Fonti, ex trabajador de YPF, de Caleta Olivia, Santa Cruz.

Queremos agradecer por la oportunidad de poder hablar delante de esta Comisión y exponer nuestros reclamos. Pedimos disculpas a nuestros compañeros porque esta nota tendría que haber sido consensuada entre todos, pero el tiempo de preparación de la misma no lo permitió. Para comenzar desde un principio, queremos hacerles llegar nuestra verdad y sufrimiento durante casi 18 años, porque después de hablar con muchísimos diputados y senadores muchos de ellos no sabían qué había pasado con nuestra querida YPF.

Esto se remonta al año 1990 cuando se comenzó a destruir a las empresas del Estado y la sociedad argentina fue convencida de que estas eran las culpables de todos los problemas del país. Nosotros podemos hablar de nuestra YPF. Decían que daba pérdida, pero no se decía que de ella subsistían todas las demás empresas nacionales, Fuerzas Armadas,

ferrocarriles, aerolíneas vialidad y otras. Además, éramos exportadores de petróleo. No valoraban el trabajo social que hacía en todo el país: hospitales, escuelas, clubes, cines. Solamente, había que administrarla bien.

Nosotros los trabajadores tenemos que reconocer no haber hecho lo suficiente en defender nuestra fuente laboral evitando la entrega a la misma, pero tenemos que decir que nuestros dirigentes gremiales del momento y la cúpula de la empresa se unieron al poder político de turno y no les importó en ningún momento el futuro de la gente. Si había que hacer un reclamo o pedir explicaciones a la Asamblea del SUPE, no la pasaban bien.

También queremos decir que en ese momento, en marzo de 1987, cuando ya se veía venir lo que desgraciadamente hoy estamos sufriendo –más que sufrimos nosotros, los ypeñanos–, explota un tanque en Puerto Rosales. La gente –hasta los mismos administrativos– sale a combatir ese terrible incendio, exponiendo su vida, en espera a que llegaran los bomberos. Esto nosotros lo hicimos –y los muchachos de Bahía Blanca lo hicieron– y no sabíamos que estábamos durmiendo con nuestros enemigos.

Cuando el Congreso de la Nación sanciona la ley 23.696 de reforma del Estado se crea el programa de propiedad participada y se determina que todos los trabajadores que al 1º de enero de 1991 hayan pertenecido a la empresa deben considerarse sujeto adquirente del 10 por ciento de las acciones Clase C. A partir de allí comienza nuestro calvario porque todo el personal que había dejado todo por la empresa comenzó a ser manipulado de la peor forma que se puede imaginar en tiempos de democracia con los trabajadores argentinos. Si uno iba a un sector y preguntaba por Juan o Pedro decían: “No sé, lo han mandado al curso”. ¿En qué consistía? En mandarlo a su casa, pagarle el sueldo por un tiempo y a los cinco o seis meses te mandaban el telegrama de despido. O si no, te destinaban a muchos kilómetros de tu casa para que no aguantes más y pidas el retiro voluntario. Nunca supimos cómo se determinaba, a quién sacaban y quién duraba un tiempo o más. ¿No les hace acordar a ustedes la peor época argentina?

El gremio no hablaba, pero sí recordamos que en los años 86 y 87 se hicieron muchísimas medidas de fuerza porque el Gobierno del doctor Alfonsín amagó –solamente amagó– a dar áreas de explotación. Y con esto que les digo que saque cada uno sus propias conclusiones.

Por eso nosotros decimos que fue un genocidio de casi 25.000 personas con sus familias. Se destruyeron familias, subsidios, hijos que no pudieron culminar sus estudios. ¿Cuánto daño moral y psicológico se produjo? ¿Tiene precio todo esto? Hay cosa que dinero ya no pueden solucionar.

También pedimos que se ubiquen en el tiempo. Era época de una desocupación en el país. ¿Cuántas empresas petroleras podían absorber gente que siempre trabajó en el petróleo? Todos éramos viejos para trabajar y jóvenes para jubilarnos. Por eso el país se llenó de kioscos, remises, despensa, por falta de experiencia y la situación económica. Terminamos perdiendo todo lo que cobramos por indemnización. Hay muchas razones que tenemos para sostener nuestro pedido. *(Sollozando.)* Sólo el que lo vivió sabemos de nuestro sufrimiento, porque hay que encontrarse en la mitad de la vida de una persona sin trabajo. Perdón.

– *Luego de unos instantes.*

Sr. Fonti. – Sin trabajo y un futuro incierto para él y su familia. No hay forma de explicarlo. (...)

Luego el sindicato con el Gobierno las vendió en la banca de Morgan en Nueva York, con un monto de casi mil millones de dólares, que nosotros nunca supimos qué se hizo con ese dinero. Acá es donde apareció el estudio del abogado Rubén Leto y asociados, entre otros, y se forma la Federación de Ex agentes de YPF de la República Argentina y comienza

la lucha legal que culmina el 20 de noviembre de 2001 con sentencia favorable de la Corte Suprema. Sale en 2002 la ley 25.471 como consecuencia de una negociación entre el estudio Leto con el Gobierno. A espaldas nuestras reconocen nuestro derecho, pero el monto de la ley es muy inferior a la sentencia judicial, que cayó en los juzgados laborales no así en los juzgados federales, lo cual consideran que no deben abonarse porque se abonan con dicha ley.

Por eso es que se sigue cometiendo una injusticia con todos nosotros. Porque en una misma causa algunos ex ypefianos cobraron montos superiores a los 150.000 pesos y la gran mayoría cobró entre 10.000 y 17.000 bonos PR12. Gran parte de ellos lo tuvieron que vender a la financiera a la mitad de su valor, por necesidades urgentes. La gran mayoría está representada por el estudio de Rubén Leto y asociados y con el transcurso del tiempo llegamos a la conclusión de que fuimos engañados por dichos profesionales. Nosotros consideramos que hubo mala praxis, ya que cobraron el 20 por ciento de la ley 25.471, más la sentencia, que llegaron a salir en los juzgados laborales, pero como la gran mayoría de los expedientes estaban en los juzgados federales fueron abandonados. Sería muy interesante que alguien pudiera investigar el circuito, estudio, Ministerio de Economía, juzgado federal, porque notamos muchas irregularidades ahí.

En 2009 había varios proyectos. Uno era el del diputado Dante González y otro del diputado Roberto Mullerón, que luego de largas reuniones se unificaron en el proyecto 7027. Luego de pasar luego de pasar por tres comisiones en Diputados –con la única disidencia, que era la de la forma de pago–, no se trata en el recinto porque el diputado Rossi dice que para nosotros no hay plata. Pero se han hecho resarcimientos económicos a expresos políticos, a las víctimas de la AMIA. No decimos que no correspondan, pero fue otra oportunidad perdida por nosotros.

Nos alegramos muchísimos cuando en 2012 se recupera nuestra querida YPF para el pueblo argentino. También nos hubiera gustado que nos invitaran cuando se legitimó; lástima que ahora se tenga que pagar un dinero muy importante para el país por algo que nunca se tendría que haber vendido. En la vida todos cometemos errores; lo importante es reconocerlos y pedir disculpas, que no es de cobarde, sino que habla de hombrías de bien porque el tiempo y la historia de estos últimos veinte años nos dio la razón de que nunca tendrían que haber privatizado YPF. El pueblo argentino, y los ex trabajadores de YPF en particular, nos lo merecemos. Si bien es cierto que este problema este Gobierno lo heredó, recibe el reclamo porque es el que más tiempo lleva en el ejercicio del poder. O no pudo o no quiso solucionarlo, a pesar de que varios funcionarios de este mismo Gobierno en su momento levantaron la mano para su privatización.

En resumen, si somos los trabajadores de YPF los legítimos dueños del 10 por ciento de la propiedad participada preguntamos: ¿Quiénes fueron los autores de tamaño despojo y qué destino tuvo ese porcentaje de acciones? Si son bienes gananciales desde el momento de su implementación a la fecha, ¿cuánto dinero acumuló y por consiguiente por qué se nos privó de este usufructo? ¿Cuál sería la técnica de la deuda real teniendo en cuenta las acciones que corresponden por agente, los dividendos, punitivos y daños morales? El Poder Legislativo fue el que autorizó la privatización de YPF en su momento.

Por eso consideramos, señor presidente, que es el mismo el que tiene que darnos una solución definitiva. Pedimos que se forme una comisión de senadores. Somos conscientes de las dificultades económicas que tiene este país, pero con un diálogo sincero y profundo de ambas partes podríamos solucionar definitivamente este problema.

Señor presidente: nuestro pedido es, por favor, arbitrar los medios. A usted, como petrolero, queremos una reunión con los senadores. Sabemos que esto tiene que salir rápido,

pero, por favor, necesitamos reunión para charlar con ustedes.

Señores senadores: la realidad es que el Estado siempre es responsable de todos los actos de Gobierno, pero en este caso tiene nombre y apellido y fue beneficiado con una banca en esta Honorable Cámara de Senadores y ni siquiera viene a trabajar.

Señores representantes del pueblo argentino: con humildad les pedimos que comiencen a construir un nuevo país, con verdad, justicia y libertad. Y recuerden que entregar nuestro petróleo es como entregar nuestra bandera. Desde ya, muchas gracias.

Sr. Presidente (Pereyra). – Gracias, compañero Fonti.

Quiero expresarle que cuando vino el señor Jefe de Gabinete a exponer en esta Honorable Cámara quien le habla le expresó la necesidad de que se les pague la deuda a los compañeros ex ypefianos y de Gas del Estado, que también se encuentran en esta situación similar. Me pidió que elevara los nombres por regiones y por agrupación. Ustedes han trabajado en esto y lo tienen perfectamente identificados. Nadie encuentra encuentran la razón por la cual no han terminado de cobrar algo de 5.000 ex ypefianos y ex trabajadores de Gas del Estado. Quedé en comunicarme con el Jefe de Gabinete y sería bueno que ustedes me acerquen esos datos para poder gestionar y ver qué es lo que se puede hacer y estar en contacto con ustedes y que no estén abandonados en el medio de desierto sin poder hacer absolutamente nada.

Quiero decirle también que desde mi organización sindical en Río Negro y en Neuquén hemos actuado en este sentido. Estos emprendimientos no tenían ningún tipo de adiestramiento y se fundían, porque no estaban preparados para gerenciar. Nosotros agrupamos a los 21 emprendimientos en una empresa, que entonces era SADE, después Skanska, y la transformamos en Skaneu. Todos los trabajadores ex ypefianos entraron a trabajar allí, empezaron a trabajar allí. Se ha jubilado gran parte de ellos, pero ha sido una forma de contenerlos y de que puedan seguir trabajando, para que ello los dignifique y puedan llegar así a la jubilación, ya que no podían llegar de otra manera.

Las acciones en conjunto son las que benefician a la gente. Es tarde, ya no pueden formar emprendimientos. Lo que hay que buscar es que se les pague lo que realmente se les debe. Comparto plenamente lo que usted está diciendo, compañero.

Sr. Fonti. – Muchas gracias, señor presidente, pero también le quiero decir que no somos 5000 o 6.000; somos prácticamente 25.000. Estoy hablando de ex agentes de YPF. Nuestros compañeros de Gas del Estado también son compañeros nuestros, pero nosotros somos 25.000, aproximadamente, en todo el país.

Sr. Presidente (Pereyra). – Está bien, gracias. Yo estaba hablando de lo que les falta cobrar todavía. Gracias.

Tiene la palabra la senadora Labado...

Sr. Fonti. – Disculpe, senadora.

Usted se está refiriendo a los que faltan cobrar la ley 25.471; yo hablo del 10 por ciento en total.

Sr. Presidente (Pereyra). – Gracias.

Tiene la palabra la señora senador Labado.

Sra. Labado. – Primero, lo saludo a Fonti, a quien conozco ya que es vecino de mi ciudad. Conozco su trabajo, conozco su trayectoria como trabajador ypefiano, pues mi padre también lo era.

Hemos hablado con Fonti en varias oportunidades respecto de su reclamo. Él anda con una carpeta –no sé si la trajo hoy– donde muchos diputados, senadores y políticos de todo tipo dicen estar de acuerdo con su reclamo. Bueno, yo he sido una de las que le ha dicho a Fonti que no espere un papelito de esos con mi firma. Primero, porque no acostumbro a

hacer esas cosas. Segundo, porque si bien, como planteó Fonti, hay un reclamo y en algún momento se trató de resarcir con la ley 25.471, donde muchos se acogieron y otros no, también mucho tuvieron mucho que ver los estudios jurídicos que en su momento tomaron los juicios. Personalmente he tratado de hablar con algunos estudios jurídicos –porque no todos los tiene Leto–, y cuando llama un senador para preguntar sobre uno de los juicios, lo toman a mal. A mí me ha pasado específicamente con algunos compañeros –vos lo sabés, Fonti– de nuestra ciudad.

Conozco el tema. Reitero: no ha que hacer demagogia con el reclamo de los ex ypefianos, sino que hay que estudiar en profundidad el alcance de la ley 25.471 y el reclamo legal que hace cada uno de los estudios jurídicos de Capital Federal –porque los estudios jurídicos están acá, no están en Santa Cruz ni en Caleta Olivia; son abogados de acá–, para ver en qué situación específicamente están los juicios y cómo se puede llegar a acordar en el marco de la ley 25.471, que sigue vigente.

Sr. Presidente (Pereyra). – Por último, invitamos a Ceferino Leiva, un trabajador de empresa contratista de YPF, de la zona de Catriel.

Sr. Leiva. – Gracias, señor presidente. Buenas tardes.

Primero que nada, quería agradecerle al senador por haberme invitado a poder expresar ante esta comisión mi experiencia como petrolero en la región. Yo vengo de Catriel, Río Negro, puerta norte de la Patagonia, donde la empresa YPF tiene asentada la mayor parte de los yacimientos de Río Negro. Soy integrante del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, y trabajo casi con 20.000 compañeros trabajadores en la actividad petrolera.

Es cierto, cuando Repsol empieza a trabajar en la zona, en realidad, no hacía muchas inversiones; vino a llevarse todo, a tratar de sacar lo que podía y dejar lo que quedaba. Desde que empezó YPF a trabajar, se empezó a trabajar en la medio-remediación del suelo de la región de Catriel.

También, como decía el senador Pichetto hace un rato, hay varias empresas formadas por las comunidades mapuches que trabajan de esta actividad. Convivimos con ellos; tienen afiliados a nuestro sindicato, donde nosotros les brindamos la obra social y la mutual. Trabajan en la zona de Catriel.

Creo que YPF ahora está trabajando y está medio-remediando el suelo, que es una de las cosas que vemos nosotros en la región de Río Negro, en el puntito chiquito que existe en el país. Creo que Repsol no lo hizo en su época, y vino a llevarse todo, lo cual fue así. Gracias a las inversiones que está haciendo YPF, se está extrayendo y se cuida más el medioambiente. Eso es seguro: se cuida más el medioambiente, porque nosotros somos ciudadanos de esa ciudad y tratamos de controlarlo, ya que mis hijos nacieron ahí, estudian ahí y creo que van a seguir viviendo ahí.

Desde ya, les agradezco a ustedes por escuchar mi experiencia como petrolero, que lo soy desde el año 1992.

Sr. Presidente (Pereyra). – Gracias, señor Leiva.

Tiene la palabra el señor senador Solanas.

Sr. Solanas. – Es interesante el testimonio último. No vamos a poner en duda que la nueva YPF está atacando el tema de la contaminación ambiental; pero partamos del hecho de que está todo contaminado. Los yacimientos han contaminado las napas de agua potable, como consecuencia de un manejo irresponsable y puramente rentístico de Repsol y sin un control público adecuado que le exigiera el cuidado ambiental.

No vamos a cambiar de eje esta conversación. Esta conversación tiene como uno de sus temas principales saber por qué no hay una auditoría seria del estrago ambiental

producido durante la gestión de Repsol-YPF. Acá se entregó una botella con agua contaminada. Usted lo sabe muy bien, señor presidente, porque usted es de allá. En todas las aguadas usted saca agua y, en muchas de ellas, usted acerca un fósforo y flamea. Yo he filmado varios testimonios, y si alguien duda de ello se lo puedo proyectar al instante, porque lo tengo cargado.

Entonces, ¿quién remedia el estrago ambiental? Este es el tema. Este es un tema que está por encima de los partidos.

No son ciudadanos de segunda las comunidades de los pueblos originarios. Acá se están mezclando varios debates. Hay un debate central, que es si es justo o no el procedimiento, la tasación y el convenio para expropiar el 51 por ciento de las acciones. De pronto también se ha mezclado con los derechos de los pueblos originarios, que son pueblos preexistentes a la Nación Argentina. En la Reforma Constitucional de 1994 yo fui vicepresidente de la Comisión de Nuevos Derechos, e introdujimos un artículo sobre el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. Pero de esto se cumple muy poco.

Volviendo al tema de la tasación, nosotros estamos ante un convenio arreglado entre las partes sin la previa tasación del Tribunal de Tasaciones de la Nación. ¡Esto es nulo de nulidad absoluta! ¡Violación del artículo 17 de la Constitución Nacional!

El dictamen de tasación se dibujo después del convenio. Algunos, poco informados, creen que el Tribunal de Tasación de la Nación es algo así como la Auditoría General de la Nación. ¡Aterricemos! Es una dependencia, o mejor dicho, un ente autónomo que depende del Ministerio de Planificación, conducido por el ministro Julio De Vido. ¡Qué coincidencia! El convenio viola el artículo 17 después de la tasación que surge de una de las partes que han participado de él.

Pero voy a decir más: tuvieron dos años para hacer una auditoría sobre el estrago ambiental. No fue hace dos meses; ¡fueron dos años!

En este sentido, el ministro Kicillof reconocía hace dos años y en esta Casa que, seguramente, la indemnización por estrago ambiental iba a ser superior y que Repsol nos debía pagar; luego, el senador Fuentes saco toda una serie de datos.

Estos debates tienen la limitación del tiempo, porque tendríamos que empezar a cotejar de dónde sacaron esas cifras y qué credibilidad tienen. Seguramente, como yo voy a leer las mías, ustedes podrán pensar lo mismo: ¿Qué credibilidad tendrán las cifras de Solanas? Pero, si bien tenemos ópticas distintas, lo real es lo que vemos en esta botellita. Lo real es que las obligaciones del gobierno del Neuquén, de proporcionar agua potable en 200 litros diarios, no se cumplen. ¡No se cumple!

Las comunidades tienen que ir hacia la ciudad más próxima a hacer el reclamo y, finalmente, se termina tomando esa agua o saliendo a comprarla. Señor presidente: usted lo sabe. Entonces, hay incumplimiento y hay muchos juicios en curso, muchos.

A continuación, voy a leerle un informe que en junio de 2012 presentó el Laboratorio de Toxicología de la Corte Suprema de la Nación cuando confirmó, por ejemplo, que el lago Los Barreales, del Neuquén, contenía hidrocarburo 50 veces por encima del máximo permitido para realizar actividades acuáticas y que las aguas no eran aptas para el consumo por la presencia de kerosene, gasoil, aceites y metales pesados.

Asimismo, fueron detectados hasta 15 miligramos de hidrocarburos por litro, cuando el máximo autorizado para realizar actividades acuáticas es de 0,3 miligramos por litro. Por otro lado, el lago Los Barreales provee de agua a Cutral Có y a Plaza Huincul; este, unido al lago Mari Menuco, provee de agua a la Ciudad de Neuquén.

Señor presidente: estamos en ese estadio y usted también sabe que los acuíferos y los sistemas hídricos subterráneos son de alta complejidad y que casi todos se intercomunican.

Por eso, cuando algún ingeniero le dice que eso es muy seguro o que tal caño está cementado, hay que plantear: "Ingeniero, dentro de cuatro o cinco años ¿qué pasará?"

Porque, si bien la tierra no se mueve –acá no hay movimientos sísmicos– ¿cuántos se han quebrado en estos años? ¿Cuántos derrames hemos tenido? Por eso, el daño ambiental y el daño producido por la explotación petrolera rara vez se verifica en el momento. Puede haber un accidente en el momento, pero, en realidad, es un daño a futuro, que sucede a futuro, y nadie va a sacar los caños rotos que están abajo. Ahora bien, ¿quién paga las consecuencias? Estamos hablando de que el agua potable, el bien más precioso que tiene la humanidad y nuestro país, en pleno cambio del calentamiento global, en Neuquén, está contaminada.

Luego, sobre la cantidad de metales pesados en esas aguas –un tema central y estratégico–: ¿cuál es la tasación de ese tramo? Los estudios que se hicieron –no los voy a cansar, pero los tenemos acá– hablan de que la remediación, para hacerla bien, tardará quince o veinte años. Es decir que para solucionar el tema de las pasturas y para intentar remediar el problema del agua se necesitan aproximadamente 5 mil millones de dólares.

Sr. Presidente (Pereyra). – Perdón, la senadora Negre de Alonso le está pidiendo una interrupción.

Sr. Solanas. – Con mucho gusto.

Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. – Gracias presidente y gracias senador.

Estoy tomando, atentamente, nota sobre lo que usted está informando en cuanto a una pericial que se ha hecho en una causa en la Corte y usted mencionó que es de junio de 2012. Entonces, a fin de poder entrar al expediente de la Corte, quiero decirle que no mencionó la causa. Es de junio de 2012, pero no mencionó la causa y ese es el nombre que le quiero solicitar.

Sr. Solanas. – Para ir redondeando, acá falta un real estudio y auditoría sobre el estrago ambiental, porque esto es muy serio y las consecuencias van a tener que ser pagadas por Repsol; pero de lo que estamos discutiendo aquí es del motivo por el que YPF va a liberar a Repsol del daño que ha ocasionado.

Estas son consecuencias que vamos a tener que pagar en el futuro. Por otra parte, como muy atinadamente recordó acá el ingeniero Guadagni, nos vamos a hacer cargo de los numerosos juicios contra Maxus-YPF. Y, con los brasileños, ¿cómo vamos a liberarnos de la de la causa de la represa de ciclo combinado de Entre Ríos con un fallo en primera instancia de 1050 millones de dólares?

Luego, ¿quién va a indemnizar de una vez por todas a los trabajadores de YPF? ¡Es algo extraordinario! En la historia contemporánea argentina se han cometido hurtos, despojos y también arbitrariedades, entre ellas, no haberles entregado a los trabajadores el 10 por ciento de las acciones, liquidarles los dividendos e impedir el lugar que les correspondía en el Directorio.

Señor presidente: entonces, creo que estamos ante una causa muy fraudulenta, porque tampoco se hizo una auditoría real de reservas que hay en cada uno de los pozos de YPF-Repsol. Alguno me dijo: "Pino: el precio es justo; es muy difícil hacerlo en tan poco tiempo"; ahora bien, han pasado ya dos años.

Aquí lo que se ha establecido es un precio surgido de la división de las 360 mil acciones de YPF por el precio actual de la acción. "Hacelo Pino que te va a dar, aproximadamente...". Este número está dibujado.

Señor presidente: esto es mucho más serio, porque una vez más la Argentina será la perjudicada y terminará pagando 13.700 millones de dólares. Los pagará, con los intereses, el

Tesoro nacional pero, además, a ello se sumará la montaña de juicios que aparecerán ahora y en el futuro. Por eso, es una barbaridad, pero siempre el vendedor se tiene que hacer cargo de los pasivos que deja. Y es una barbaridad que no puede consentir ningún senador, porque va contra los intereses de la Nación haberle perdonado o eliminado esta responsabilidad a Repsol.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Pereyra). – Gracias, senador Solanas.

Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

– *El señor senador Morales realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.*

Sr. Presidente (Pereyra). – Las damas primero.

Sra. Negre de Alonso. – Gracias, señor presidente; pero él es el presidente de la primera minoría, del bloque de la Unión Cívica Radical.

– *El señor senador Morales realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.*

Sra. Negre de Alonso. – Gracias senador Morales.

Quiero avanzar un poquito más: en efecto, creo que tenemos que hacer un pacto de paz entre el progreso y el medio ambiente. ¿Cómo llegamos al pacto de paz? Aquí muchos lo han nombrado sin llamarlo “pacto de paz”, pero yo lo llamo así.

Pero en realidad me preocupa otra cosa, que entiendo que es el tema central: los daños ambientales. Estos pueden ser pasivos ocultos o no ocultos; listados de juicios que están incorporados o listados de juicios que no están incorporados. Entonces, lo que les pido a los presidentes de las comisiones, en especial al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que representa al oficialismo en esta comisión, es ver si podemos dar un pequeño paso de avance para esclarecer esto para la semana que viene.

Respecto de los pasivos no ocultos, digamos, los pasivos ambientales existentes, que no son ocultos, pero que han sido omitidos, les pido concretamente, señores senadores Fernández y Pereyra, que se incorporen al listado, dado que si las litis están trabadas, las causas existen. En definitiva, lo va a pagar el Estado argentino, lo vamos a pagar todos. Esta es una primera cuestión.

La segunda cuestión que me preocupa son los pasivos ocultos, que es de lo que habló el señor senador Pino Solanas, los mencionó la señora senadora Elías de Pérez también la semana pasada y de los que han hablado los gobernadores públicamente; hay constancias públicas. Entonces, aquí hay una pequeña confrontación de intereses entre las provincias que son petroleras y aquellas que no lo somos. El 51 por ciento de las acciones, sobre las acciones que se estatizan, son del Estado nacional y el 49 por ciento será de las provincias petroleras. Las provincias petroleras, algunas de ellas, no todas –dijimos que Salta y Tierra del Fuego no, había otra más pero no recuerdo cuál– han denunciado y reclamado daños ambientales. No hay renuncia de los estados autónomos provinciales a ejercer los derechos de reclamar indemnización futura por esos pasivos aparentemente ocultos. Digo “aparentemente” porque algunos gobernadores los han cifrado.

¿Qué nos pasa a las provincias que no somos petroleras? Vamos a participar pagando la adquisición de YPF, nunca vamos a cobrar regalías porque no somos parte, no somos petroleras, pero después vamos a tener que pagarle a las provincias petroleras el pasivo oculto que está siendo denunciado acá. Entonces, me parece que para un equilibrio provincial, de la autonomía provincial, los que representamos a las provincias no petroleras deberíamos exigir que para la semana que viene los señores gobernadores de todas las provincias enumeradas –ya se habló la reunión pasada con cifras, etcétera, si no, lo puedo

repetir porque tengo la documentación aquí– renuncien a las acciones por esos supuestos pasivos ocultos ambientales. Porque existen o no existen. Si no existen renuncian por las dudas que aparezcan, si son ocultos. Si no son ocultos y existen, ¿cuál es la situación?, ¿van a reclamar? Entonces, el resto de las provincias sabremos qué hacer. Hay una pequeña tensión de intereses que ha surgido de este debate, más allá del derecho de los pueblos originarios, que nadie se los cuestiona.

Como representante de una provincia que no es petrolera digo: nosotros vamos a pagar YPF, el Estado nacional; las petroleras van a pagar por la participación societaria pero van a tener regalías. Ahora bien, no vaya a ser que después tengamos que pagar los pasivos ambientales ocultos a las provincias que son petroleras y que no han renunciado a la acción. Entonces, los que somos abogados sabemos que un requisito insoslayable de este tipo de acuerdo es que así como tienen que renunciar a los juicios –ahí está mencionado que se renuncian a la acción y al derecho–, que los gobernadores que han dicho que hay no sé cuántos miles y miles de millones de dólares que nos van a reclamar al resto para que les paguemos, que renuncien; por favor, los señores gobernadores, que están todos de acuerdo, que manden la renuncia con el apoyo de sus legislaturas provinciales diciendo que no hay pasivos ocultos y que si los hubiera renuncian a la acción y al derecho. Eso es igualdad federal.

Sr. Presidente (Pereyra). – Tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. – Quisiera que informen... Yo les pregunté a los dos presidentes informalmente y me gustaría que le informen al marco de la comisión cómo está el pedido que hicimos de que esté presente Daniel Eduardo Martín, para luego continuar. Necesitamos imperiosamente la presencia del presidente de la sala del Tribunal de Tasación. Le agradecería si nos pudiera explicar cómo está la situación y si va a venir hoy o mañana, para yo poder seguir.

Sr. Presidente (Fernández). – Nuestro bloque evaluó esa situación que usted planteó la semana pasada porque consta que en los últimos dos años la Comisión de Presupuesto –creo que es lo que corresponde, por otra parte– ha insistido reclamando la presencia de los funcionarios para que fueran consultados por los legisladores antes de tomar la decisión y se fuera al recinto a votar sobre las normas que se presentaron, sobre todo, las que son producidas o de titularidad del Poder Ejecutivo nacional.

En este caso, estuvo presente el titular del Tribunal de Tasación y se está queriendo poner en cabeza de este Tribunal algo que no existe. Entonces, nosotros insistimos sobre este particular porque queremos remarcarlo.

Escuchaba recién lo que dijo el senador Solanas de que es nulo, de nulidad absoluta. No es nada; eso no es verdad por una razón elemental: el Tribunal es un tribunal administrativo que, en primer lugar, no evalúa la constitucionalidad de las leyes; en segundo lugar, lo que hace es generarle un privilegio al Estado para cuando ejerza eventualmente el artículo 17 de la Constitución, de la expropiación de un determinado bien, tenga que cumplir con lo que dice ese artículo; por un lado, la declaración de utilidad pública y sujeta a expropiación por ley y, por otro lado, el pago.

Para poder llevar el pago adelante, el privilegio que tiene el Estado, a través del Tribunal de Tasación que goza de un enorme prestigio desde hace muchísimos años, es tener una valuación que es la que le permite consignar judicialmente el valor del bien y hacerse del bien en forma directa. Ese es el privilegio que tiene el Estado con el Tribunal.

Dice Marienhoff, quizás el padre del derecho administrativo, que si se puede resolver en forma amistosa, no se eleve a los tribunales y esto es lo que realmente está sucediendo en este caso. ¿Cómo se resuelve entonces si la ley dice en su artículo 10 que tiene que pasar por el Tribunal de Tasación? Aunque no lo hubiera dicho, la Constitución es operativa en sí

misma, por eso el artículo 17 necesita de un valor para poder presentarse y consignar judicialmente los valores. ¿Cómo se resuelve ese tema? No tiene otro remedio que resolverlo con una ley posterior, que regula o deroga la ley anterior. En este caso, lo que estaríamos haciendo con la ley que estaríamos dictaminando mañana al mediodía no es otra cosa que definir estratégicamente cuál es el valor con el que se está asumiendo que se puede acordar, valor que no puede tomar para transar el Tribunal de Tasación porque la única función que cumple es tasarla y nada más. Tasa en términos concretos y limitados, porque no puede trabajar con la subjetividad del mercado ni en cuanto a las acciones, ni en cuanto al valor de los bonos, ni en cuanto a la participación en el mercado. Ninguna de esas opciones son posibles.

Entonces, no ganábamos nada con traer a un funcionario para que repita lo que dijo, dado que son valoraciones en términos de lo que hace un tribunal administrativo y ahí se agota. El resto es una decisión política que tomó el Poder Ejecutivo, en el marco de lo arbitrario que tiene el Poder Ejecutivo, la ejecuta y la eleva al Congreso para que, a través de una ley posterior, pueda modificar la ley anterior dándole un valor cierto a esa negociación amistosa, como dice Marienhoff, y en ese caso concluirlo. Por eso, entendimos que no era necesario traer al presidente del Tribunal de Tasación. Entendimos que era un tema concluido con la documentación que se adjuntó a cada uno de los legisladores, que está conocido cuál es el valor y que no tiene más valor que una presentación específica porque no dicta sentencia, sino que dictamina nada más, aconseja de alguna manera al Poder Ejecutivo y ahí se agota, con lo cual no puede ser nulo algo que no tiene valor legal; se agota en un consejo al Poder Ejecutivo.

Entonces, el tema lo dejamos claro sobre este punto y por esa razón entendimos que no correspondía que trajéramos al presidente del Tribunal de Tasación. Entendíamos que la información que se podía dar ya se dio; no hay otra información que se pueda dar más que la que ya se conoce por parte de los señores senadores.

Sr. Presidente (Pereyra). – Tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. – Señor presidente: la verdad es que no compartimos lo que acaba de decir el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Realmente, estamos en presencia de – por la información que tenemos, y por eso queremos confrontar con el Tribunal de Tasaciones– un incumplimiento de la ley.

Como ha dicho el senador Solanas, este es un acuerdo que está antes del dictamen. Es un acuerdo al que se arriba antes del dictamen, que es remitido por el Tribunal de Tasaciones el 17 de febrero.

En *Página 12* del día 26 de noviembre del año pasado, el propio Kicillof dice que el principio de acuerdo con Repsol está sometido a confidencialidad. “Es producto de nueve meses de conversación entre distintos sectores”, “Cualquier número afecta las acciones y podría generar un cimbronazo bursátil”. Además, dice que el principio de acuerdo está sometido a confidencialidad y no se puede hablar de valores cuando cualquier número afecta las acciones y podría generarse un cimbronazo bursátil.

Más adelante, en la misma nota, dice: “En tanto, la agencia de noticias *Euro Press* informó que fuentes cercanas al Consejo de Administración de Repsol anticiparon que hay una ‘predisposición positiva’ para la aprobación de lo acordado ayer. Los diarios españoles *El País*, *El Mundo*, *ABC* y el económico *Expansión* coincidieron en que la cifra que recibiría la compañía alcanzaría los 5.000 millones de dólares”. 26 de noviembre del año pasado.

Luego estuvimos revisando lo que dice *El País* el 26 de noviembre, donde hay una foto de Brufau, siempre sonriente. Dice: “Tras el acuerdo firmado el lunes en Buenos Aires para zanjar el conflicto que arrastra la empresa con el gobierno argentino por la expropiación

del 51 por ciento del paquete accionario”, etcétera. “La oferta propone el pago de 5.000 millones de dólares, 1.500 en bonos convertibles”. Es decir, al día 26 ya está planteado hasta el esquema financiero.

Luego, *El País*, en una nota anterior, dice: “No obstante fuentes próximas a la negociación indicaron que el gobierno argentino podría haber puesto sobre la mesa un acuerdo valorado en 5.000 millones de dólares”.

El Mundo, también con fecha 26 de noviembre, dice: “Buena disposición, pero analizando los detalles, Repsol revisa la letra pequeña y las garantías de cobro de los bonos argentinos para respaldar mañana el principio de acuerdo alcanzado por los gobiernos de España, México y Argentina, por el que este último país prevé compensar con 5.000 millones de dólares 3.700 millones de euros en bonos”. Esto es del 26 de noviembre.

¿Cómo fue el tema? Después le avisan al Tribunal de Tasaciones. Un gobierno que le ha metido la mano al INDEC, ¿cómo no le va a meter la mano al Tribunal de Tasaciones? Si acá les mintieron al pueblo argentino con los datos del INDEC desde enero de 2007, ¿cómo no van a agarrar al Tribunal de Tasaciones y le van a decir: “Saquen un dictamen de 5.000 millones?” Entonces, estamos en presencia de esta situación, de la comisión de un delito por parte del Tribunal de Tasaciones. Nosotros estamos evaluando llevar a la Justicia penal al Tribunal de Tasaciones.

De acuerdo a la evaluación que hacemos del dictamen que aporta el Tribunal de Tasaciones sobre los activos, Kicillof ha venido a hablar de todos los principios contables. Acá tengo la Resolución Técnica N° 10. Yo soy contador, y si de algo sé es sobre los criterios de evaluación y de hacer, de confeccionar estados contables. En esta resolución se establecen los criterios de valuación. Y tengo también la resolución del Tribunal de Tasaciones, que establece los criterios de valuación del Tribunal de Tasaciones. Y en función de la aplicación de los criterios de valuación para cada uno de los rubros que están integrando activos, pasivos y que determinan un patrimonio neto, cómo el principio, en función de todos los principios que el propio Tribunal de Tasaciones ha planteado como criterio de valuación, a nosotros nos surgen diferencias que en este momento no las quiero plantear, pero que dan cuenta de que para nada tienen que ver.

Con todo respeto, me permito dar nuestra opinión respecto de esta decisión del bloque de senadores del Frente para la Victoria. Es porque el Tribunal de Tasaciones está flojo de papeles, porque han mentido. Porque nos han mentido en la cara con este informe que nos llega sobre la hora en la reunión de la semana pasada. Y no es como dice el senador Aníbal Fernández, porque están incumpliendo la ley. Porque en todo caso, la Ley de Expropiaciones tendría que haber hecho referencia al acuerdo de partes para la determinación del precio. Y esto es lo que se trae a consideración del Senado. No se está cumpliendo con el texto de la ley.

El senador Aníbal Fernández, ya la semana pasada soslaya la participación del Tribunal de Tasaciones y la aplicación de la Ley de Expropiaciones. Y es central el cumplimiento de la Ley de Expropiaciones, porque su artículo 11 dice que los procesos de expropiación estarán regidos por lo establecido en la ley 21.499 y actuará como expropiante el Poder Ejecutivo Nacional.

El precio de los bienes, según el artículo 12, se determinará conforme lo previsto en el artículo 10 y concordantes de la ley 21.499. La tasación la efectuará el Tribunal de Tasaciones. No es que el Tribunal de Tasaciones puede venir porque resulta que están de paseo, viene el presidente, se sienta, nos dice A o B y da lo mismo. La ley, en sus artículos 11 y 12, establece cuál es el criterio de determinación de procesos de expropiación y el precio de los bienes sujetos de expropiación.

El artículo 10, al que hacemos referencia expresa en el artículo 12, dice: "La indemnización sólo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación. No se tomarán en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ganancias hipotéticas, ni el mayor valor que pueda conferir al bien la obra a ejecutarse. No se pagará lucro cesante. Integrarán la indemnización el importe que correspondiere por depreciación de la moneda y el de los respectivos intereses".

Inclusive, establece claramente cuál es el criterio que se tiene que adoptar para la valuación, qué queda adentro y qué queda afuera. Con lo que la ley le obliga, le impone al Tribunal de Tasaciones sentarse, como se sentaron el otro día, pero nada más que dibujaron todo, hicieron un informe, dibujaron la valuación el 17 de febrero, cuando el acuerdo ya estaba hecho en noviembre. Esto es lo que trae el gobierno. Y acá hay incumplimiento de la ley por parte del gobierno y un delito que está cometiendo el Tribunal de Tasaciones.

Nosotros queremos que revisen esta decisión del bloque de senadores. Necesitamos estar frente a frente con el Tribunal de Tasaciones, tomar rubro por rubro, comparar la valuación que hicimos utilizando los criterios que establece la normativa del Tribunal de Tasaciones, y llegaremos a diferencias muy distintas, demostrándole que nos han mentido en la cara y que están cometiendo un delito. Entonces, presidente, no es de paso el tema, sino central. Porque acá hay una ley de expropiación que determina cuál es el procedimiento y cómo se establece fehacientemente el precio de la expropiación.

No quiero ahora agarrar rubro por rubro y decir cuánto determinamos nosotros y cuánto ellos. Eso lo haremos mañana, cuando les pedimos que reconsideren esta negativa. Nosotros sabemos por qué lo hacen: porque el Tribunal de Tasaciones está tan flojo de papeles y ha mentido tanto en la valuación que han hecho, que incumplen la ley.

En todo caso, tendrían que haber traído otra ley diciendo por la que se dejan sin efecto los artículos 11 y 12 de la Ley de Expropiaciones e ir hacia un acuerdo para ver cuál es el precio, así se ponen de acuerdo con Repsol y el debate es otro, de si el precio es justo o no. Pero no hay posibilidades de determinar si un precio es justo o no si no somos eficientes. Para eso hay una ley. Para eso hay un artículo de la Constitución. Para eso se habla de los pasivos. Tenemos también todo el análisis sobre los pasivos. Inclusive, sin tener en cuenta los pasivos ambientales que bien se han planteado acá y que bien hemos planteado nosotros. Hemos separado el análisis. Hemos hecho un análisis sobre los otros rubros del pasivo, y ahí nos meten el perro, nos mete la mula el Tribunal de Tasaciones. Aun ahí.

La verdad, presidente, nosotros necesitamos avanzar y confrontar este análisis que hemos hecho para demostrar el dibujo que ha hecho el Tribunal de Tasaciones y de qué modo están junto al gobierno nacional incumpliendo la ley. Por eso, reiteramos el pedido de reconsideración y que mañana vengan todos los técnicos del Tribunal de Tasaciones.

Les anticipo además que ya estamos estudiando con nuestros abogados la promoción de una acción penal en contra del Tribunal de Tasación. Así que vengan mañana, presidente, por favor.

Sr. Presidente (Pereyra). – Tiene la palabra el señor senador Fernández.

Sr. Presidente (Fernández). – Después de 32 años de contador no sé si sé más que el senador Morales de evaluación, pero menos tampoco, con lo cual he evaluado ese tipo de cosas porque la decisión también la voy a tomar. Soy uno de los 72 senadores que va a tomar esta decisión que se viene, pero voy a hablar como abogado y no como contador.

No se puede decir que se incumple la ley cuando lo que estamos tratando es un proyecto de ley que aprueba un acuerdo. La ley posterior deroga la ley anterior, y es por definición literal.

El acuerdo amigable, que es lo que dice el artículo 1º, en esas condiciones, Marienhoff reclama: "Si es posible hacerlo en forma amigable, ¿para qué va a elevarlo a los tribunales?". Es un acuerdo que se tiene que referir a las valoraciones, que lo explicó el presidente de YPF y el ministro de Economía. Se hicieron en función de muchísimas evaluaciones que se solicitaron a distintos estudios y empresas para poder contener en ella la subjetividad y el conocimiento acabado de lo que realmente vale la empresa. Ese 51 por ciento vale de esa empresa, específicamente, y no se puede evaluar por el valor del patrimonio neto porque estamos hablando de acciones que cotizan en bolsa, de bonos y de un montón de situaciones en términos de lo que significa la posición...

Sr. Presidente (Pereyra). – Perdón, señor senador, quisiera saber quién es el señor que, cuando hablan los senadores, se ríe y festeja. El señor que está de traje azul y corbata al lado de la señora diputada.

- *Los señores senadores Pichetto y Morales realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono.*

Sr. Presidente (Fernández). – Señores, si siempre funcionó muy bien, hagámoslo funcionar de la misma manera. Si tiene otra cosa para charlar, que lo haga afuera y nosotros seguimos con lo nuestro, por tedioso que fuera.

La discusión la estamos centrando...

Sr. Morales. – La línea argumental que usted está planteando lleva a la conclusión que se está pagando un precio acordado y que no se condice con el valor de la expropiación que ha determinado el Tribunal de Tasación, como nosotros queremos determinarlo. Entonces, estamos pagando más de lo que vale.

Sr. Presidente (Fernández). – El Tribunal de Tasación cumple una función administrativa, y no sentencia, sino dictamina. Al dictaminar, lo que dice es: "Yo veo que...", "aconsejo que...". Esto es lo que puede llegar a hacer. No puede hacer otra cosa. Lo dice la ley 21.499. Hay que verla con la realidad en ese marco. A dónde vamos a ir cuando hay una discusión, y lo que dice Marienhoff de tratar de llegar a una solución amigable, quiere decir que es a una solución política. Cuando hay una solución amigable, hay que hacer las valoraciones de lo que puede significar el patrimonio neto. Además del patrimonio neto, entran a jugar un montón de otros factores, que somos los que tenemos las decisiones, el *management* propiamente dicho de la empresa.

Asimismo, que la empresa cotiche en bolsa, que tiene una existencia en el mercado que no tenía, que tiene una participación específica en las reservas que las ha recuperado y las tiene, que tenía un valor cuando se vendió y tiene un valor cinco veces más grande que el que tenía en aquel momento, que tiene valoraciones respecto a lo que significan las reservas en shale gas y shale oil importantísimas, y ya definidas y certificadas, hay muchas cosas que entran a evaluarse en este caso, y que exceden al Tribunal de Tasación, que solo hace una decisión administrativa, es decir, da un consejo y ahí se agota su participación. Que nosotros los traigamos acá para que discuta algo que no tiene que discutir, lo tenemos que discutir nosotros. Es una discusión política. ¿No les satisface el valor? Es posible y tiene todo el derecho del mundo. Y si usted cree que alguien está haciendo mal las cosas, también tiene todo el derecho a hacer su denuncia. Nosotros ni nos oponemos, ni metemos, ni opinamos. Sus adjetivaciones son suyas.

En este caso es bien claro que la ley posterior deroga, modifica, altera o corrige, eventualmente, las características de la ley anterior. ¿Y cuáles son las características? Ese artículo de la ley que habla específicamente de la tasación del tribunal, que queda a un costado cuando se toma una decisión política de arribar a una solución amistosa. Y se arriba a una solución amistosa por un valor determinado, valiéndose de un montón de estudios

profesionales e internacionales que son los que saben cómo se valoran estas cosas, cómo se cotizan y definen, y son los que le ofrecen a YPF un valor real y cierto de lo que está sucediendo hoy en el mercado.

Ustedes recuerden que Brufau decía que había que pagar 18 mil millones de dólares. Si hoy estamos pagando 5 mil, alguna razón tenemos. Evidentemente, tan mala no debe ser la gente. Si suponen que hay pasivos ocultos, pareciera ser que en la administración son salames y no se dan cuenta que tienen cosas ocultas y que no lo tienen que poner en su balance. No han previsionado determinado juicio. Pareciera que los abogados son tontos y no saben cómo se valoran, y que hay causas que no se tuvieron en cuenta por parte del Tribunal. ¿No será que las causas están demandando al Estado nacional y no a YPF?

Entonces, estas cosas son de discusiones específicas nuestras, no del Tribunal, ya que hizo lo que tenía que hacer. Se agota con su presentación de su consejo. Esta es una definición política, y nuestro bloque tiene claro que es una decisión política, que es la de aprobar el acuerdo, porque amistosamente le conviene a la empresa y a nosotros. Nos posiciona bien en el mercado internacional y nos permite conseguir capitales para las exploraciones. Las explicaciones del presidente de YPF huelgan en mis expresiones, y este es el objetivo formal.

Entonces, ¿por qué la presencia del presidente, si los que tenemos que responder somos nosotros por la discusión política?

Sr. Presidente (Pereyra). – Tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. – Con todo respeto a los presentes, lo que a todos nosotros nos jode es pagar por una empresa vaciada el precio de una empresa recuperada, porque estamos pagando el precio que vale hoy al valor del mercado –unos dólares menos- una empresa que fue vaciada. Y para esta conclusión a la que arribamos hoy nosotros en estos días de estudiar el informe del Tribunal de Tasación, porque es lo que marca si pagamos bien o mal, y para nosotros se está pagando un precio que no corresponde porque expropiamos una empresa vaciada y estamos pagando el precio de una empresa recuperada por los argentinos, que desde hace dos años vienen administrando, y nosotros hemos votado. Ese es el punto y para eso es central el Tribunal de Tasación.

Sr. Presidente (Fernández). – No existe la necesidad de la presencia del Tribunal de Tasación porque es una expresión administrativa. Si lo que usted dice tiene razón, estamos en presencia de un ilícito, y tiene todo el derecho a denunciarlo. Porque presentar o definir una plusvalía respecto a lo que vale una empresa, que hoy la mayoría es del Estado y funciona como una sociedad anónima, si se paga de más, es decir, por encima de lo que corresponde, hay que denunciarlo y es un delito, y tiene todo el derecho del mundo de hacerlo.

Sr. Presidente (Pereyra). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – ¿Usted quería decir algo? Le doy la palabra.

Sra. Negre de Alonso. – Disculpe, senador Morales, pero me surgió a partir de lo suyo y no quiero que después me digan que invierto el orden de la palabra en la forma que establece el Reglamento del Senado.

Quiero dejar otra inquietud al oficialismo en este momento, ya que alo mejor podemos solucionarlo de acá a la semana que viene. Le pregunté al ministro de Economía y al senador Fernández –estuve releendo la versión taquigráfica-, y me contestó rápido que es otra emisión. Le pregunté respecto a los bonos y le dije que parte del *stock* de bonos que tiene...

- *El señor senador Fernández realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.*

Sra. Negre de Alonso. - ¿Me deja terminar? Déjeme hacer la preguntar o transferir las dudas

que tengo para que me las disipen o para que mañana puedan traer una respuesta. Parte de los bonos del BonarX y Boden 2015 están en el *stock* que tiene el Fondo de Sustentabilidad de la ANSES.

Sr. Presidente (Fernández). – No, no.

Sra. Negre de Alonso. – Están, salvo que la semana pasada los hayan vendido.

Usted la semana pasada me dijo que no es una emisión nueva. Mire, presidente, es la misma serie. Fíjese bien que estamos emitiendo la misma serie. Entonces, si usted emite la misma serie, la cotización va a ser la misma.

Hoy la acción de YPF ha cerrado a 2,93 en alza. Pero si se quiere armar una maniobra para bajar el precio de las acciones, esto va a impactar en forma directa en el Fondo de Sustentabilidad. ¿Qué es lo que se puede hacer? Hay que cambiarle el número de serie. Pónganle el mismo bono, pero cámbienle el número de serie. El mismo bono y la misma serie, mayor cantidad de bonos. Era eso lo que quería decir: ¿por qué no le cambiamos el número?

Sr. Pichetto. –Lo vamos a transmitir, senadora. El ministro de Economía explicó muy bien este tema, senadora. Dijo que eran bonos que eran del mercado, los Discount y los Bonar, pero que se iban a emitir nuevos. Lo dijo claramente.

Lo vamos a transmitir, senadora. Lo que ocurre acá es que hay siempre una teoría de la conspiración. El senador Morales está haciendo un aporte importante para que la asamblea española convalide el acuerdo, diciendo que estamos pagándole a la empresa lo que la empresa no vale. Reconozco que es un aporte importante, senador Morales. Seguramente contribuirá en el espíritu y en el ánimo de los españoles que tendrán que votar el 28 -dos días después- la decisión esta, que me parece que es una de las mejores decisiones que hemos tomado. Y además va en rumbo de lo que ustedes sostuvieron siempre: la necesidad de resolver este tema, de normalizar la relación con España, con los mercados, para que vengan inversiones. Este discurso lo escuchamos hasta el agobio.

Ahora bien, el día jueves concurrió el gobierno, senador Morales. El gobierno con sus principales referentes que intervinieron de manera directa en la negociación. Vino el secretario Legal y Técnico, que nunca vino al Senado, para este tema. El doctor Zannini, por haber intervenido en la negociación. Vino el ministro de Economía, el presidente de YPF y el encargado del Tribunal de Tasación, y explicó el tema largamente. Podrían haberle preguntado. Lo que consideramos es que ustedes están en todo el derecho de hacer una apreciación subjetiva. Si consideran que hay irregularidades, denunciarlo. Si consideran que está mal hecho el dictamen, hacer la crítica. Pero ya estamos dentro de las valoraciones subjetivas que tiene cada bloque frente al acontecimiento legislativo que estamos tratando. Nosotros no lo vamos a traer nuevamente. Creemos que la explicación que dio fue completa. Podemos estar de acuerdo o no. Podemos decir lo que ustedes dicen y nosotros decir que es una tasación hecha conforme a las reglas de un Tribunal de Tasación, que siempre ha sido valorado en la Argentina.

Por otra parte, también le digo que no estamos valorando o no estamos tasando una propiedad, un inmueble. La tasación que se ha hecho ha sido altamente compleja; de activos que tiene la empresa, indudablemente, a lo largo y ancho del país, también afuera en el extranjero. Y consideramos que se ha hecho bien. Usted dice que está mal hecha. Bueno, considérenlo en el dictamen respectivo de mañana al mediodía. En el debate también plantéenlo. Nosotros vamos a sostener otra cosa. Consideramos que estamos frente a un acuerdo razonable, equilibrado y conveniente para los intereses del país, para que puedan venir inversiones a desarrollarse en la Argentina y para que empecemos a normalizar temas que indudablemente todos estamos de acuerdo que debían normalizarse. El tema del acuerdo

con Repsol era un acuerdo necesario. El tema del Club de París, el tema del CIADI... Le hace bien a la Argentina todos estos temas. Y además si usted pertenece a un partido mayoritario, como pertenece, y son una opción de poder en la Argentina, es mejor que las cosas que están pendientes se puedan resolver y ordenar.

Así que no va a venir nuevamente el presidente. Lo lamento. Usted sabe bien que siempre tratamos de ser amplios. No va a venir. ¿Por qué? Porque ha venido, porque ha estado. Ha puesto la cara. Ha hecho un informe; lo ha hecho en filminas y lo ha explicado. Esa era la oportunidad, el momento para hacerle saber que no estaban de acuerdo. Y también al ministro de Economía, que hizo valoraciones respecto al valor de la empresa. Dio las valoraciones que explicaba recién el senador Fernández. Todo esto lo desarrollamos largamente el día jueves.

Sr. Presidente (Pereyra). –Damos por agotado el debate en el día de hoy. Pasamos a un cuarto intermedio hasta mañana a las 12 horas.

– *Son las 17 y 2.*